



R.A. 24/2023-VI

RECURRENTES Y QUEJOSAS:

***** ***** , SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE Y
***** ***** ** ***** , SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

RECURRENTES ADHESIVOS:

DIRECTOR GENERAL DE AMPARO
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS EN
SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA
DIRECTORA GENERAL DE AMPAROS
CONTRA LEYES Y DEL
SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS, EN REPRESENTACIÓN DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA
ADMINISTRADORA DE LO CONTENCIOSO
DE GRANDES CONTRIBUYENTES "5", DE
LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LO
CONTENCIOSO DE GRANDES
CONTRIBUYENTES, DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
GRANDES CONTRIBUYENTES DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, ÓRGANO
DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN
REPRESENTACIÓN DEL JEFE DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

MAGISTRADO PONENTE:

RICARDO OLVERA GARCÍA

SECRETARIA:

ADELA RAMOS ZÁRATE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Ciudad de México. Acuerdo del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de once de enero de dos mil veinticuatro.



VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de febrero de

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES.

A) El H. Congreso de la Unión, formado por las Cámaras de

B) El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos

C) La C. Jefa del Servicio de Administración Tributaria.”

“IV. ACTOS RECLAMADOS.

A) Del H. Congreso de la Unión, conformado por la Cámara

La discusión, aprobación y expedición del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto especial sobre Producción y Servicios de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Usados, del Código Fiscal de la Federación y otros disposiciones" del 26 de octubre de 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del mismo año, así como por lo que hace a la adición de los artículos 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 32-D, fracción IX, 42, fracciones XIII, 48-A, 84-M y 84-N y la reforma a los artículos 49, primer



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

párrafo, fracciones I y VI, todos ellos del Código Fiscal de la Federación, que establecen textualmente lo siguiente: (se transcribe).

Las disposiciones legales antes transcritas guardan una íntima relación entre sí y se impugnan de manera conjunta como un sistema normativo por virtud del cual se han establecido a cargo de los sujetos obligados, obligaciones fiscales en materia de beneficiario controlador. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:

‘AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD.’ (se transcribe texto).

B) Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la expedición el 10 de noviembre de 2021 del Decreto Promulgatorio del Decreto Legislativo referido en el inciso **A)** anterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de noviembre de 2021 en específico por la adición de los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 32-D, fracción IX, 42, fracciones XII y XIII, 48-A, 84-M y 84-N y la reforma a los artículos 49, primer párrafo, fracciones I y VI, todos ellos del Código Fiscal de la Federación antes transcritos.

C) De la C. Jefa del Servicio de Administración Tributaria se reclama la expedición de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021, específicamente por lo que hace a sus numerales 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23 que son del tenor siguiente: (se transcribe).

Con fundamento en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, mi mandante impugna la inconstitucionalidad de la norma general que reclama de forma autoaplicativa toda vez que, como se demostrará en los apartados posteriores, su mera entrada en vigor ocasiona en la esfera jurídica de la quejosa un agravio personal y directo susceptible de ser impugnado a través de la presente instancia constitucional.

Las disposiciones legales que la quejosa reclama en la presente instancia entraron en vigor a partir del 1 de enero de

'TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES.' (se transcribe texto).

SEGUNDO. En la demanda de amparo se mencionaron los antecedentes del caso y señaló como preceptos constitucionales invocados, los artículos 1, 14, 16, 31, fracción IV, y 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. La demanda de amparo se turnó al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y en acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo, se ordenó registrarla en el libro de gobierno bajo el número J.A.I. *****; se admitió a trámite; se requirió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

Seguido el juicio en sus trámites legales, en sentencia firmada el **tres de noviembre de dos mil veintidós**, la jueza resolvió:

***“ÚNICO. Se **sobressee** en el juicio de amparo a que este expediente se refiere.
Notifíquese.”***

CUARTO. Inconformes con la resolución anterior, *****
*****, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y *****



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**** ** *****, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpusieron recursos de revisión, los cuales, por cuestión de turno, se remitieron a este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Por acuerdo de Presidencia de seis de enero de dos mil veintitrés, se ordenó formar el toca **R.A. 24/2023-VI**; se admitieron los recursos de revisión; y se pusieron los autos a disposición de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal Colegiado, quien se abstuvo de formular pedimento, a pesar de haber sido oportunamente notificada.

En acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se admitieron los recursos de revisión adhesivos interpuestos por el Director General de Amparo contra Actos Administrativos en suplencia por ausencia de la Directora General de Amparos contra Leyes y del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en representación del Presidente de la República y la Administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “5”, de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria.

Al encontrarse los autos en estado de resolución, por proveído de **tres de febrero de dos mil veintitrés**, se turnó el expediente al Magistrado Ricardo Olvera García, para la formulación del proyecto respectivo.

Por acuerdo de **veintisiete de octubre de dos mil veintitrés**, se recibió el oficio *********, a través del cual se hizo del conocimiento del acuerdo dictado por la Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en el expediente “SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA” 166/2023; en el que, entre otras cosas, se ordenó suspenderse el dictado de la resolución, hasta que se emitiera la resolución correspondiente en el citado expediente; por lo que se suspendió en dictado de la resolución.

En acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, se recibió el oficio ***** , en el cual hace referencia al acuerdo dictado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, del que se advirtió entre otras cosas, que, ninguno de los ministros integrantes de la citada sala hizo suya la solicitud de ejercicio de facultad de atracción por lo que la desechó por falta de legitimación de la parte solicitante; asimismo, informó que este tribunal debe seguir con el trámite del presente asunto, razón la que se hizo del conocimiento a las partes la continuación del presente asunto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Colegiado tiene competencia legal para decidir el presente asunto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; 38, fracción V, y 39



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que se impugna una resolución dictada por un juez de distrito en una audiencia constitucional celebrada en un juicio de amparo indirecto.

SEGUNDO. Legitimación. El recurso de revisión fue interpuesto por parte legitimada en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que la recurrente *****

***** ** ***** ** ***** ***** ***** *****

***** , tiene el carácter de parte quejosa en el juicio de amparo, en tanto que ***** es su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; carácter que le fue reconocido por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós en el juicio de amparo aludido.

Asimismo, el recurso de revisión adhesiva, se interpuso por parte legitimada para ello, ya que lo interpone la Director General de Amparo contra Actos Administrativos en suplencia por ausencia de la Directora General de Amparos contra Leyes y del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, **en representación del Presidente de la República**, así como la Administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “5”, de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria** en su carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo de origen.

Lo anterior se refleja en el siguiente recuadro:

Notificación	Surte efectos	Sábados y domingos	Días declarados inhábiles	Plazo	Presentación del recurso
4 de noviembre de 2022	7 de noviembre de 2022	5, 6, 12, 13, 19 y 20 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	Del 8 al 22 de noviembre de 2022	22 de noviembre de 2022

Los recursos de revisión adhesivos se presentaron oportunamente. Dichos cómputos se reflejan en los cuadros siguientes:

Del Director General de Amparo contra Actos
Administrativos en suplencia por ausencia de la Directora General
de Amparos contra Leyes y del Subprocurador Fiscal Federal de
Amparos, en representación del Presidente de la República:

Notificación	Surte efectos	Sábados y domingos	Días declarados inhábiles	Plazo	Presentación del recurso
10 de enero de 2023	10 de enero de 2023	14 y 15 de enero de 2023	Ninguno	Del 11 al 17 de enero de 2023	17 de enero de 2023

De la Administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “5”, de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Notificación	Surte efectos	Sábados y domingos	Días declarados inhábiles	Plazo	Presentación del recurso
13 de enero de 2023	13 de enero de 2023	14 y 15 de enero de 2023	Ninguno	Del 16 al 20 de enero de 2023	19 de enero de 2023

CUARTO. No se transcriben las consideraciones de la sentencia recurrida ni los agravios que hacen valer las recurrentes, al ser innecesario para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, no obstante, previamente se repartió a los integrantes de este tribunal, para su información, copia del escrito de agravios y de la sentencia recurrida, de la cual se agrega copia certificada al expediente.

Sirve de apoyo a la consideración anterior, la jurisprudencia 2a./J 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹, de rubro:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”

QUINTO. Consideraciones de la sentencia.

El A quo determinó, por una parte, sobreseer en el juicio, en atención a las siguientes consideraciones:

En el considerando **primero**, fijó su **competencia** para conocer y resolver el asunto.

En el considerando **segundo**, **precisó los actos reclamados**, mismos que se hicieron consistir en:

¹ Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXI, de mayo de dos mil diez, consultable en la página 830.

- La aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación” publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, específicamente los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 32-D fracción IX, 42, fracciones XII y XIII, 48- A, 49 primer párrafo, fracciones I y VI, 84-M y 84-N, todos del Código Fiscal de la Federación.

- La expedición de la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2022”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, específicamente las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23.

ADELA RAMOS ZARATE
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.56
28/07/24 18:12:02



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

número F/1210, previamente constituido y en el que la quejosa actúa como Fiduciaria, en cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 32 B Ter, 32 B Quáter, 32 B Quinques y demás disposiciones reclamadas del Código Fiscal de la Federación.

- El requerimiento realizado por la quejosa *****, **, sociedad anónima de capital variable, a *****, sociedad anónima de capital variable, para que proporcione la información y documentación relacionada al beneficiario controlador, derivado del contrato de intermediación bursátil 100519 en cumplimiento a los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 32-D fracción IX, 42 fracciones XII y XIII, 48-A, 49, primer párrafo, fracciones I y VI, 84-M y 84-N, del Código Fiscal de la Federación.

En el **considerando tercero** determinó la **inexistencia** de los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, estas dos últimas del Congreso de la Unión, así como al Jefe del Servicio de Administración Tributaria consistentes en:

- El requerimiento realizado por la quejosa ***** , sociedad anónima, institución de banca múltiple, a ***** , sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero ***** , para que proporcione información y documentación relacionada con el beneficiario controlador, derivado de su futura participación como Fideicomisario en el Fideicomiso número F/1210, previamente constituido y en el que la quejosa actúa como

[illegible]

- racione
deración

participar
rataban

uarto de
dente C
ara de
timas d
de sus re



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación” publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, específicamente los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinques, 32-D fracción IX, 42, fracciones XII y XIII, 48- A, 49 primer párrafo, fracciones I y VI, 84-M y 84-N, todos del Código Fiscal de la Federación.

Además que también, es cierto el acto reclamado a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria en la expedición de la Resolución Fiscal para 2022, respecto de las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23.

En el considerando **quinto** analizó la causa de **improcedencia** y estableció:

Que al rendir su informe tanto el Presidente de la República como la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, sostuvieron que en el caso se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

Que citado el artículo 61, fracción XII, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa o cuando se promueve contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; en tanto que el numeral 5° de la Ley de Amparo, señala que la norma, acto u omisión reclamados deben producir una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; así como que el artículo 107, fracción I, constitucional, prevé uno de los principios rectores

tente en
 e agravia
 do debe
 la parte

c) El procedimiento de selección de los miembros del Comité de Autogestión de la Empresa deberá atender a los siguientes criterios:

máximo T
 destacados
 uno de e
 procedente

procedencia
que el
os de la p

juicio de
ere esp



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

entrada en vigor o si requiere de un acto de aplicación posterior para concretar sus efectos en su esfera jurídica, para lo cual se debe acudir a la naturaleza de éstas, es decir, se debe establecer si tienen el carácter de autoaplicativas o heteroaplicativas.

Que el Alto Tribunal estableció que para distinguirlas, conviene atender al concepto de individualización incondicionada, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo que contienen, vinculan a las gobernadas y gobernados a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho.

Que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiriera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad de las personas y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal.

Que si las obligaciones derivadas nacen con la ley, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de un ordenamiento autoaplicativo o de individualización incondicionada; por el contrario, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que

Que en el caso, la quejosa *****

Que en ese contexto, acuden al juicio de amparo a reclamar la aprobación, expedición y promulgación del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación” publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, específicamente los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 32-D fracción IX, 42, fracciones XII y XIII, 48- A, 49 primer párrafo, fracciones I y VI, 84-M y 84-N, todos del Código Fiscal de la Federación, así como la expedición de la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2022”, publicada en el Diario Oficial de la



Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, específicamente las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23.; en su carácter de norma autoaplicativa, pues consideran que con la sola entrada en vigor les causa perjuicio.

Que luego de transcribir el contenido de las citadas normas, así como la exposición de motivos de las normas generales reclamadas, se conoce que prevén un sistema normativo complejo, integrado por normas heteroaplicativas tendentes a regular el sistema de contabilidad y verificación de la obligación de llevar, obtener, conservar y presentar la información relacionada con los beneficiarios controladores en los actos jurídicos, que precisa de la materialización de diversos actos jurídicos, tal como se explicará a continuación.

Que debe destacarse que los sujetos obligados a proporcionar la información requerida en dichos numerales, esto es, a quienes está dirigida dicha obligación fiscal, son: a) Primera categoría. Las personas morales fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios en fideicomisos; contratantes o integrantes en cualquiera figura jurídica. b) Segunda categoría. Notarios, corredores o cualquier persona que intervenga en formulación o celebración de contratos o actos para la constitución de dichas personas, celebración de fideicomisos o cualquier otro acto; así como las entidades financieras e integrantes del sistema financiero.

Que este punto es importante, dado que para la aplicación de las normas en estudio es insuficiente ser sujeto de la norma (cualquiera de dichas categorías), sino que, además, se requiere la existencia de diversos actos jurídicos (condicionantes), como son la existencia de fideicomisos o celebración de contratos en los

Que de esta forma, la autoridad fiscal podrá requerir la presentación de los documentos respectivos a ambas categorías de personas, así el procedimiento (heteroaplicativo) respectivo se integra por: 1. Presentación de solicitud de información, la cual podrá ser notificada a los beneficiarios controladores o a terceros relacionados. 2. Dicha información deberá ser presentada dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a su notificación. 3. Dicho plazo podrá ampliarse.

Que, aunque la información de mérito es considerada como parte de la contabilidad de la persona contribuyente, ello no impide considerar que se deberá presentar la información generada a partir de las propias reglas previstas en la normatividad combatida; aunado a que se establece el deber de crear procedimientos con el objeto de identificar a dichos beneficiarios, ya sea por sí o para requerirlo a los propios beneficiarios, los cuales también podrán ser objeto de revisión fiscal y se considerarán parte de la contabilidad.

Que dicha información deberá obtenerse y conservarse en términos del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, esto es, dentro del plazo atinente a la contabilidad.

Que en relación con los propios contribuyentes (primera categoría de sujetos), de conformidad con el artículo 32 Bis QUINQUIES, deberán mantener actualizada la información tocante a los beneficiarios controladores, y ante la existencia de modificaciones, deberá actualizarla dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en que se haya verificado la



Que la interpretación de las normas tocantes a la identificación de dicho beneficiario, en lo que no se oponga a la normatividad fiscal, se llevará a cabo en términos de las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera

oro Glob
con Fine
ración y
internac
o A del M

seguida por el combate al código Fiscal y la administración que exige el Fondo en relación con los mercados locales.

del Decreto
ersas dis
de la
npuesto l
ral del l
scal de
e destaca
áter, 32-E
A, 49 prin
scal de la

de origen

que
PARTES
EN EL A
A RENTA
ATIENDE
SUMIDOS

el incum
y present
controlado
ra, es
er sancio
84, frac
chas nor

señalar la obligación de procedimiento con los beneficiarios de financiación de la parte general, respecto de los actos jurídicos

e el siste
ere de d

Que por ello, las obligaciones relacionadas con la contabilidad en comento, se condiciona a la celebración de esos actos jurídicos y al requerimiento respectivo que haga la autoridad.

Que sustenta esta determinación la tesis cuyos datos de publicación y texto son los siguientes: *"INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES."*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Que, las quejasas ofrecieron como medios de prueba de su parte, los instrumentos notariales ***** ** *****
 ***** , de la Notaría Pública número quince del entonces Distrito Federal, cotejo número ***** * *****
 tirado ante la fe del Notario Público doscientos veintisiete de la Ciudad de México, catorce mil trescientos veintinueve pasada ante la fe del Notario Público doscientos once del entonces Distrito Federal; testimonio del Acta cuatro mil setecientos ocho expedido por el Titular de la Correduría Pública número ochenta y dos de la Ciudad de México, que contiene la fe de hechos de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, por virtud de la cual

 ***** , en su calidad de fiduciario, solicita le sea proporcionada la información y documentación correspondiente al beneficiario controlador de la operación respectiva; la cédula de identificación fiscal de la quejosa ***** **
 ***** , expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria.

Que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional la publicación en el Diario Oficial de la Federación la “Resolución por la que se autoriza la organización y operación de una institución de banca múltiple que se denominará ***** *****” en fecha cuatro de abril del dos mil dos, así como la diversa divulgación en el referido medio de difusión de la “Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a *****”, para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple”, datada el veintidós de mayo del dos mil nueve”.

Que de lo anterior se desprende que las quejas son personas morales con capacidad jurídica para celebrar actos

ADELA RAMOS ZARATE
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.52.50
28/07/24 18:12:02

dominante

Que a mayor abundamiento, se advierte que de las documentales anexadas por las quejas, no se desprende que hayan llevado a cabo algún acto jurídico con efectos fiscales, en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

el cual se identifique plenamente a un beneficiario controlador en términos de las normas reclamadas, o que se haya requerido por parte de la autoridad la información respectiva.

Que al respecto, del contenido del testimonio del Acta cuatro mil setecientos ocho expedido por el Titular de la Correduría Pública número ochenta y dos de la Ciudad de México, se aprecia que el fedatario hizo constar que el veintiuno de febrero del dos mil veintidós, el delegado fiduciario de la quejosa *****

correo electrónico y archivo adjunto, solicitando a quien aduce ser la encargada de *****

para que proporcionara información y documentación relacionada al beneficiario controlador, derivado de su futura participación como "Fideicomisario" en el Fideicomiso número "F, diagonal, mil doscientos diez, previamente constituido y en el que su representada actúa como "Fiduciario".

Que sin embargo, lo anterior no demuestra en modo alguno que se haya aplicado a la esfera jurídica de las accionantes el sistema normativo impugnado, en virtud de que, en principio, no media un requerimiento formulado por la autoridad hacendaria, pues únicamente se aprecia del acta en cuestión, que tuvo verificativo una comunicación entre quien aduce ser la quejosa

***** y
quien aduce es ***** , quien es la persona
encargada por parte de *****

***** , y quien es titular de los correos
***** y
***** ; para que le proporcionara

Que de ello se sigue que no existe un requerimiento de autoridad hecho a la gobernada, ni tampoco se demostró que proporcionó información fidedigna y completa de los beneficiarios controladores del aludido fideicomiso, pues no se tiene la certeza de que efectivamente recabó, obtuvo o conservó dicha información, sino solamente consta que se hizo una solicitud que además, carece de la información relacionada con el beneficiario controlador.

Que a la misma conclusión debe llegarse en relación a la documental consistente en la solicitud firmada por *****
***** *****, de fecha primero de agosto del dos mil veintidós y dirigida a la moral *****
***** ** ***** ***** , y al que se adjunta un formato titulado “Carta Declaratoria” que no contiene información y que no corresponde a la forma y términos indicados por el Servicio de Administración Tributaria conforme a la normatividad reclamada. A más de que las documentales aportadas por los accionantes, por sí solas, son insuficientes para acreditar que se

Que es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 170500, de rubro ***“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.”***

***** , tiene por
objeto, entre otras actividades, la de realizar las siguientes
operaciones: recibir depósitos bancarios de dinero a la vista,
retirables en días preestablecidos, de ahorro y, a plazo o con
previo aviso; aceptar préstamos y créditos; emitir bonos
bancarios; emitir obligaciones subordinadas; constituir depósitos
en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior;
efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos, expedir
tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en
cuenta corriente; asumir obligaciones por cuenta de terceros, con
base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de
aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como la
expedición de cartas de crédito; operar con valores en los
términos de las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito
y de la Ley del Mercado de Valores; promover la organización y
transformación de toda clase de empresas o sociedades
mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de interés en
las mismas, en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito;
operar con documentos mercantiles por cuenta propia; llevar a

Que *****

ADELA RAMOS ZARATE
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.56
28/07/24 18:12:02

ientes q
tizacione
ción que
nacional
vicios d
nes repr
inscritas
cipar po
aciones;
teriores,
disposici
asesora
artículo
r, posee
utilizar
os y bien
entes pa
de sus t
a cabo d
disposici
ria y de
ico, el
en gene
a aquell
ral actua
cado de
ades y p
unidad co
y con ape
tiles; así



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

objeto social, incluyendo el abrir todo tipo de cuentas bancarias y con instituciones especializadas para el depósito de valores.

Que lo anterior, pues las gobernadas exhibieron los instrumentos notariales mediante los cuales acreditan que realizan dichas actividades. Sin embargo, se reitera, es claro que la parte quejosa no demostró que tiene el deber de informar sobre dichos beneficiarios controladores, porque no exhibió acto o contrato alguno del cual derive su obligación de informar, llevar la contabilidad y, en su caso actualizarla; y, sobre todo, identificar dichos beneficiarios en términos de las propias normas reclamadas. Aunado a que tampoco demostró que la autoridad hacendaria le requirió tal información, o incluso, como tercero, le haya notificado el requerimiento respectivo.

Que además, para los fines que atañen a esta sentencia, resultaba necesario el ofrecimiento de diversos medios de prueba que evidenciaran que la parte quejosa estaba dentro de los supuestos normativos impugnados, precisamente, a partir de su individualización, por esos motivos, este juzgado de Distrito no puede verificar el interés jurídico con las solas declaraciones exhibidas por las contribuyentes o porque hizo una solicitud vía correo electrónico sobre una futura participación como fideicomisario a diversa moral, dado que debe cumplir con remitir la información requerida en los términos prescritos por las propias normas reclamadas, y no con escritos libres, aunado a que no se advierte en todo caso que haya mediado requerimiento de la autoridad hacendaria, ni tampoco que haya proporcionado, conservado o actualizado la información de un beneficiario controlador en concreto.

Que sirve de apoyo analógico, la tesis 2a. CLII/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “LEYES TRIBUTARIAS. LOS ACTOS LEGISLATIVOS QUE MODIFICAN UN ELEMENTO ESENCIAL DE UNA CONTRIBUCIÓN SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA CUANDO SU INDIVIDUALIZACIÓN ES INCIERTA E INDEPENDIENTE DE QUE LOS CONTRIBUYENTES REALICEN EL HECHO IMPONIBLE.”

Que resulta aplicable la tesis número 1a./J. 4/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ***“LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO.”***

Que en consecuencia, toda vez que las quejas carecen de interés jurídico para instar el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SEXTO. Punto de firmeza.

Debe quedar firme por falta de impugnación la determinación contenida en el considerando **TERCERO** en el que se decretó la inexistencia de los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, estas dos últimas del Congreso de la Unión, así como al Jefe del Servicio de Administración Tributaria consistentes en:

- El requerimiento realizado por la quejosa *****, sociedad anónima, institución de banca múltiple, a *****, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero *****, para que proporcione información y documentación relacionada con el beneficiario controlador, derivado de su futura participación como Fideicomisario en el Fideicomiso número F/1210, previamente constituido y en el que la quejosa actúa como Fiduciaria, en cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 32 B Ter, 32 B Quáter, 32 B Quinquies y demás disposiciones reclamadas del Código Fiscal de la Federación.

El requerimiento realizado por la quejosa ***** **
 ***** , sociedad anónima de capital variable, a *****
 ***** , sociedad anónima de capital variable, para que
 proporcione la información y documentación relacionada al
 beneficiario controlador, derivado del contrato de intermediación
 bursátil 100519 en cumplimiento a los artículos 32-B Ter, 32-B
 Quáter, 32-B Quinquies, 32-D fracción IX, 42 fracciones XII y XIII,
 48-A, 49, primer párrafo, fracciones I y VI, 84-M y 84-N, del
 Código Fiscal de la Federación.

“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la **sentencia** impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente”.

Por su parte, la recurrente parte de en su único agravio refiere que en el considerando tercero, el juez de Distrito sostiene que no son ciertos los actos reclamados al Presidente de la Republica, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Jefe del Servicio de Administración Tributaria consistentes en los requerimientos de información y documentación que las quejas formularon sobre el beneficiario controlador de uno de los fideicomisos y cuentas financieras, ya que de las constancias que integran los autos se advierte que las responsable no participaron en su emisión y por ende, debe tenerse por inexistente, aunado a que de los requerimientos formulados no se puede verificar que las quejas han recabado, conservado u obtenido la información a que hace alusión la legislación reclamada y por ello sobreseyó

ADELA RAMOS ZARATE
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.56
28/07/24 18:12:02



Refiere que este tribunal debe verificar que los actos que el juez de Distrito analizó, consistentes en los primeros requerimientos de información y documentación que ellas como quejas formularon, se autoaplican la normatividad que se reclama, por lo que es equivocado que sea necesaria la participación de una autoridad.

Apunta que en cumplimiento a los ordenado en los artículos 32. B Ter, 32-B Quater, 32-B Quinquies del Código Fiscal De la Federación y numerales 2.8.1.20, 2.8.1.21. 2.8.1.22 y 2.8.1.23, de la Resolución Miscelánea para 2022, los cuales prevén el sistema normativo relacionado con la obligación de obtener la información de los beneficiarios controladores acatando, cumpliendo y sometiéndose a la normatividad que a la fecha en que se formularon los requerimientos respectivos, tienen plena vigencia y es obligatoria.

Indica que el juez de Distrito paso por alto que los contribuyentes deben someterse al cumplimiento de las obligaciones que se contienen en el sistema normativo del beneficiario controlador sin que para ello sea necesario la emisión de un acto de autoridad como equivocada mente se sostiene en la sentencia recurrida.

Señala que de la simple lectura del artículo 32-B Ter del Código Fiscal de la Federación, se puede verificar que, a partir de la entrada en vigor de dicha norma, las persona morales, las fiduciarias, los fideicomitentes, las partes contratantes o integrantes de otra figura jurídica están obligadas a obtener y

tu contab
us benefi

nce a las
 resolución
 s mecani
 ción a
 do prec

nte que
ideicomis
proporo
cuales l
on corre
iso o
te que s
idad que

ces equi
e las cor
ejosa ha
ario cont
ión del r
de la qu



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

fracción I del numeral 2.8.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

El agravio es **parcialmente** fundado, lo que también ocurre con los vertidos **por las** recurrentes adhesivas.

En la sentencia sujeta a revisión, el juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo respecto de la totalidad de las normas reclamadas al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, desde la perspectiva de que la naturaleza de las disposiciones combatidas es heteroaplicativa, no autoaplicativa, de manera que se requiere la existencia de un acto concreto de aplicación que, a decir del resolutor, se actualizará hasta que la autoridad fiscal requiera a los notarios públicos la información relativa a los beneficiarios controladores y lo sancione de no presentarla.

En ese contexto, para mejor entendimiento de la solución que se propone y dado el cúmulo de argumentos que se plantean en el recurso de revisión principal, así como en las adhesivas, donde las autoridades responsables Presidente de la República, Secretario de Hacienda y Crédito Público y Jefe del Servicio de Administración Tributaria, además de argumentos de fondo también proponen causas de improcedencia, el orden que seguirá este órgano revisor para abordarlos será el siguiente:

Primeramente, se definirá la naturaleza de los artículos 32-B Ter, 32-B Quater, 32-B Quinquies, 32-D, fracción IX, 42, fracciones XII y XIII, 48-A, 49, primer párrafo, fracciones I y VI, 84-

el 8.1.22 y mil veinte el Diario el dos m cativas, p o consio parte qu n su esfe

de las m
del artí
de las c
nte de l
l Servicio
idido, si
artículos
examen
a genera

FORMAS.

reiterada
nir la nat
scindir  c
de deter

cuando u
os con



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

cuándo se requiere de un acto de aplicación, debe acudirse a la distinción entre normas heteroaplicativas y normas autoaplicativas, conceptos que ha desarrollado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Máximo Tribunal estableció que para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo que contienen, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho.

La Suprema Corte definió que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada.

La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprender al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal.

obligación de garantizar que no se produzcan de una manera arbitraria; por lo tanto, no hacer caso de la voluntad sola e individualizada de la víctima, sino de la voluntad de esas personas expresada en el Pleno Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, desde 1997, el artículo 100 de la Constitución establece:

nes es
del Pleno
e la Fed
de 1997,
ece:

Las heteroarquías de la integración económica internacional que admiten el crecimiento que, acorde con el modelo, es gobernado a su vez por la ley de la gravedad en virtud de la cual las concreciones de la integración económica tienen un elemento de gravedad que impide la existencia de la integración económica en el caso de la integración económica.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.”

Precisado ese aspecto, a continuación, se da noticia del contenido de los preceptos reclamados, que son del contenido siguiente:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

"Artículo 32-B Ter.- Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general. Esta información podrá suministrarse a las autoridades fiscales extranjeras, previa solicitud y al amparo de un tratado internacional en vigor del que México sea parte, que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información, en términos del artículo 69, sexto párrafo del presente Código.

El Servicio de Administración Tributaria notificará a las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica obligada; así como, a terceros con ellos relacionados. la solicitud de

Los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, así como las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero para fines de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tratándose de la información relativa a cuentas financieras, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad, para proporcionarla al Servicio de Administración Tributaria cuando dicha autoridad así lo requiera, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

Los registros públicos en la Ciudad de México y en los Estados de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, coadyuvarán con el Servicio de Administración Tributaria, a través de la celebración de convenios de colaboración o de intercambio de información y en cualquiera otra forma que autoricen las disposiciones aplicables, para corroborar la exactitud y veracidad de la información que sea proporcionada por las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

en el caso de los fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica obligada; terceros con ellos relacionados; personas que intervengan en la celebración de contratos o actos jurídicos, así como entidades financieras e integrantes del sistema financiero relativa a beneficiarios controladores.

Artículo 32-B Quáter.- Para efectos de este Código se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que:

I. Directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente.

II. Directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, puede o pueden:

- a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes.
- b) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social o bien.
- c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

Tratándose de fideicomisos, se considerarán beneficiarios controladores el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario o fideicomisarios, así como cualquier otra persona involucrada y que ejerza, en última instancia, el control efectivo en el contrato, aún de forma contingente. El Servicio de

Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo serán aplicables las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, acorde a los estándares internacionales de los que México forma parte, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas.

El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de este artículo.

$$[\dots]$$

IX. Incumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies de este Código.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras; las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

[...]

XII. Practicar visitas domiciliarias a las instituciones financieras; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica; así como, a terceros con ellos relacionados, a fin de verificar el cumplimiento de los artículos 32-B, fracción V, 32-B Bis, 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies de este Código. Las visitas domiciliarias a que se refiere esta fracción se llevarán a cabo conforme al procedimiento establecido en el artículo 49 de este Código.

XIII. Requerir a las instituciones financieras; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica; así como a terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o a través del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran, a efecto de llevar a cabo su revisión para verificar el cumplimiento de los artículos 32, fracción V, 32-B Bis, 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies de este Código. El ejercicio de la facultad a que se refiere esta fracción se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en el artículo 48-A de este Código.

Artículo 48-A. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades

I. La solicitud se notificará a los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento.

III. Los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos deberán ser proporcionados por el sujeto a quien se dirigió la solicitud o por su representante.

V. Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará a los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código mediante oficio, la conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presentados.

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones si, en el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el sujeto con el que se entendió la revisión no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.

El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta fracción es independiente del que se establece en la fracción IX de este artículo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

VII. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones, a que se refiere la fracción VI de este artículo, el sujeto revisado podrá optar por corregir su situación fiscal, mediante la presentación de la corrección de su declaración o de la información o documentación requerida por la autoridad, de la que se proporcionará copia a la autoridad revisora.

VIII. Cuando el sujeto revisado no corrija totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá la resolución para definir la situación de aquel sujeto, determinar las consecuencias y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se concluya el plazo señalado en la fracción VI de este artículo, la cual se notificará a los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código, cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo.

El plazo para emitir la resolución a que se refiere esta fracción se suspenderá en los casos previstos en el artículo 46-A, segundo párrafo, fracciones I, II y III de este Código.

Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero, contra el oficio de observaciones de que se trate, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa y hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.

Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado, quedarán sin efectos las actuaciones que se derivaron durante la revisión de que se trate.

En la resolución a que se refiere esta fracción deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada con el recurso administrativo y el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código contarán con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.

El plazo señalado en esta fracción se suspenderá en los supuestos previstos en el artículo 46-A, segundo párrafo, fracciones I, II, III, IV y VI de este Código.

Cuando las autoridades no notifiquen el oficio de observaciones o, en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos previstos en este artículo, ésta se entenderá concluida en la fecha en que venza el plazo de que se trate, quedando sin efectos las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha revisión.

Quando las autoridades fiscales conozcan de terceros, hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las obligaciones de alguno de los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código, le darán a conocer a éstos el resultado de aquella actuación mediante oficio de observaciones, para que pueda presentar documentación a fin de desvirtuar los hechos consignados en el mismo, dentro del plazo a que se refiere la fracción VI de este artículo.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias de los sujetos a que se refiere la fracción XIII del artículo 42 de este Código.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 49. Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones V, XI y XII del artículo 42 de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente:

I. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, asesores fiscales, instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, los últimos tres en el caso de fideicomisos, y en el de las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, así como de terceros con ellos relacionados, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes, o donde se realicen actividades administrativas en relación con los mismos, así como en los lugares donde se almacenen las mercancías o en donde se realicen las actividades relacionadas con las concesiones o autorizaciones o de cualquier padrón o registro en materia aduanera o donde presten sus servicios de asesoría fiscal a que se refieren los artículos 197 a 202 de este Código, o donde se realicen las actividades, se celebren, ejecuten, tengan efectos, documenten, registren o inscriban los actos jurídicos que den lugar al cumplimiento de las obligaciones que establecen los artículos 32-B, fracción V, 32-B Bis, 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies de este Código.

$$[...]$$

VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Previamente se deberá conceder al contribuyente, asesor fiscal, instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, los últimos tres en el caso de fideicomisos, partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, así como a terceros con ellos relacionados, un plazo de tres días hábiles para desvirtuar la comisión de la infracción presentando las pruebas y formulando los alegatos correspondientes. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en el registro federal de contribuyentes, la autoridad requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión.

I. No obtener, no conservar o no presentar la información a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código o no presentarla a través de los medios o formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales.

III. Presentar la información a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones aplicables.

I. De \$1,500,000.00 a \$2,000,000.00 a las comprendidas en la fracción I, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.

III. De \$500,000.00 a \$800,000.00 a la establecida en la fracción III, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.

Criterios para la determinación de la condición de beneficiario controlador de las personas morales

ADELA RAMOS ZARATE
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.56
28/07/24 18:12:02



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

controlador, se deberá aplicar la fracción II, incisos a), b) y c) de dicha disposición.

Para efectos de la obtención de la información a que se refiere el artículo 32-B Ter del CFF, las personas morales deberán identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios controladores, indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona moral, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad, en los casos en que el beneficiario controlador lo sea indirectamente. Se entiende por cadena de titularidad el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta, a través de otras personas morales. Asimismo, las personas morales también deberán identificar, verificar y validar la información relativa a la cadena de control, en los casos en los que el beneficiario controlador lo sea por medios distintos a la propiedad. Se entiende por cadena de control el supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica.

Quando no se identifique a persona física alguna bajo los criterios establecidos en esta regla, en relación con el artículo 32-B Quater del CFF, se considerará como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo se considerará como beneficiario controlador de la persona moral.

CFF 32-B Ter, 32-B Quater

Mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador

2.8.1.21. Para los efectos del artículo 32-B Ter, primer y tercer párrafos del CFF, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, deberán implementar procedimientos de control internos debidamente documentados. Estos procedimientos serán todos aquellos que sean razonables y necesarios para obtener y

Para efectos de lo establecido en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinques del CFF, a efecto de obtener y conservar información sobre la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica deberán cuando menos:

II. Obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada acerca de los datos de la identidad del beneficiario controlador y demás datos que se establecen en la regla 2.8.1.22., para lo cual, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, deben establecer procedimientos para que la(s) persona(s) que pueda(n) considerarse beneficiario(s) controlador(es) les proporcionen información actualizada de su condición como tales, así como que les informen de cualquier cambio en su condición, para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 32-B Quinquies, primer párrafo del CFF.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

III. Conservar la información del beneficiario controlador, de la cadena de titularidad y de la cadena de control, la documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de control internos a que se refiere el primer párrafo de esta regla, durante el plazo que señala el artículo 30 del CFF.

IV. Proporcionar, permitir el acceso oportuno de las autoridades fiscales y otorgarles todas las facilidades para que accedan a la información, registros, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores.

Cuando el SAT requiera de los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, información relativa a los beneficiarios controladores, lo hará a través de una solicitud de información que les notificará de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del CFF.

Las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero, para fines de la Ley del ISR, cumplirán con las obligaciones que establece el artículo 32-B Ter, tercer párrafo del CFF de conformidad con lo que establecen los Anexos 25 y 25-Bis.

CFF 30, 32-B Ter, 32-B Quater, 32-B Quinques, 134,
RMF 2023 2.8.1.22., 2.8.1.23.

Información que mantendrán las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica sobre sus beneficiarios controladores

2.8.1.22. Para los efectos del artículo 32-B Ter, primer párrafo del CFF, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán integrar como parte de su contabilidad la siguiente información con respecto de cada beneficiario controlador:

II. Alias.

IV. Sexo.

VI. CURP o su equivalente, tratándose de otros países o naciones.

VII. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales.

VIII. Tipo y número o clave de la identificación oficial.

IX. Clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, para efectos fiscales.

X. Estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina o del concubinario, de ser aplicable.

XI. Datos de contacto: correo electrónico y números telefónicos.

XII. Domicilio particular y domicilio fiscal.

XIII. Relación con la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso o la figura jurídica, según corresponda.

XIV. Grado de participación en la persona moral o en el fideicomiso o figura jurídica, que le permita ejercer los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o efectuar una transacción.

XV. Descripción de la forma de participación o control (directo o indirecto).

XVI. Número de acciones, partes sociales, participaciones o derechos u equivalentes; serie, clase y valor nominal de las mismas, en el capital de la persona moral.

XVII. Lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentren depositados o en custodia.

XVIII. Fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

XIX. En su caso, proporcionar los datos mencionados en las fracciones que anteceden respecto de quién o quiénes ocupen

II. Fecha de constitución o celebración, conforme a la escritura, acta, póliza, minuta, similar o equivalente que dé soporte a la constitución de la persona moral o celebración del fideicomiso o figura jurídica.

III. El nombre completo de quienes constituyen, integran o son parte de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o participaron en la celebración del fideicomiso o figura jurídica.

V. En caso de que con su intervención la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica efectúe modificaciones al capital fijo o capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica, según corresponda, la información soporte del monto y de los actos o contratos necesarios para ello.

VI. Nombre del administrador único o equivalente, en su caso, miembros del consejo de administración u órgano equivalente.

VII. Datos de inscripción, en su caso, ante los registros públicos o equivalentes.

CFF 32-B Ter, RMF 2023 2.8.1.21., 2.8.1.22

Las porciones legales reproducidas definen el concepto de beneficiario controlador, imponen dos tipos de obligaciones y prevén infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con esa institución.

DEFINICIÓN DE BENEFICIARIO CONTROLADOR

Se define como tal a la persona física o grupo de personas físicas que:

- a)** Directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

cualquier otra institución jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo realicen de forma contingente.

b) Directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra institución jurídica.

Dispone además que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, pueden:

1. Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes.
2. Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del quince por ciento del capital social o bien.
3. Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

En los fideicomisos se considerarán beneficiarios controladores el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, el

Finalmente, en la interpretación serán aplicables las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales instaurado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, acorde a los estándares internacionales de los que México forme parte, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas.

Se prevé que las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra institución jurídica, están obligadas a obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, en la forma y términos que se determine en las reglas de carácter general.

También tienen el deber de mantener actualizada la información de los beneficiarios controladores, en el supuesto de que existan modificaciones en la identidad o participación de los beneficiarios controladores, deberán actualizar la información dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se haya suscitado la modificación de que se trate, mediante reglas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

de carácter general emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Tal información podrá suministrarse a las autoridades fiscales extranjeras, previa solicitud y al amparo de un tratado internacional en vigor del que México sea parte, que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información, en términos del artículo 69, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

En caso de que el Servicio de Administración Tributaria requiera información de los beneficiarios controladores, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra institución jurídica deberán proporcionarla dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la solicitud, plazo que podrá ampliarse siempre que la petición de prórroga se encuentre debidamente justificada y se presente previo al fenecimiento del plazo original.

OBLIGACIÓN INDIRECTA (FEDATARIOS PÚBLICOS)

Los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de las personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra institución jurídica, así como las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero para fines de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tratándose de la información relativa a cuentas financieras, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener la

Esa información deberá entregarse dentro del mismo plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento, plazo que se podrá ampliar siempre que la petición de la prórroga se encuentre debidamente justificada y se presente previo al cumplimiento del plazo original.

Ningún, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, podrán contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con las personas físicas, morales o entes jurídicos que incumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies de este Código.

Para observar el cumplimiento de las obligaciones de las instituciones financieras; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica; así como a terceros con ellos relacionado, podrá realizar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

visitas domiciliarias o bien requerir que proporcione los datos, documentos o informes, para los cuales establecen procedimientos a seguir en caso de llevar a cabo la visita domiciliaria, o bien realizar un requerimiento.

INFRACCIONES Y MULTAS

Se establece que se considerarán como infracciones: no obtener, no conservar, no presentar la información o no exhibirla en la forma que establezca mediante reglas de carácter general el Servicio de Administración Tributaria; no mantener actualizada la información de los beneficiarios controladores o presentarla de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo indicado por el órgano desconcentrado.

Las multas se impondrán por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o institución jurídica de que se trate y, dependiendo de la infracción que se cometa, las sanciones serán de \$800,000.00 (ochocientos mil pesos) a \$2'000,000.00 (dos millones de pesos).

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023

En tanto que las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés prevén:

- a)** Los criterios para determinar la condición de beneficiario controlador de las personas morales.
- b)** Los mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador.

d) La información que mantendrán los notarios, corredores y cualquier otra persona sobre beneficiarios controladores.

a) Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra institución jurídica, están obligadas a obtener y conservar, como parte de su contabilidad, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, en términos de lo establecido en las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, así como para mantenerla actualizada.

ADELA RAMOS ZARATE
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.56
28/07/24 18:12:02



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad, en términos de lo establecido en las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria.

c) La información que corresponda a los beneficiarios controladores deberá ser proporcionada al Servicio de Administración Tributaria cuando éste la requiera.

d) Se impondrán multas a quienes no obtengan, no conserven o no presenten la información que corresponda a los beneficiarios controladores; no la presenten oportunamente a través de los medios o formatos que establezca el Servicio de Administración Tributaria o no la mantengan actualizada o la presenten en forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones aplicables.

La intención del legislador es que, a partir de la entrada en vigor de los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, del Código Fiscal de la Federación, **las persona morales, las fiduciarias, los fideicomitentes, las partes contratantes o integrantes de otra figura jurídica**, están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad, información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores.

A partir de la entrada en vigor de la norma, **se impone una obligación de hacer** a los fiduciarios públicos consistente en obtener y conservar, como parte de su contabilidad **información de sus beneficiarios controladores y a proporcionar, permitir el acceso oportuno de las autoridades fiscales.**

Como consecuencia, **las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés y sus anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27**, al regular cómo deberá realizarse esa obtención de información de los beneficiarios controladores y su identificación, también tienen **naturaleza autoaplicativa**.

Esa condición se actualizará, como lo resolvió el juzgador, hasta que alguna autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo público se niegue a celebrar con quien no haya cumplido con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Ter y 32-B Quinquies; la autoridad fiscal realice una visita domiciliaria o realice un requerimiento; o bien, imponga las multas previstas en los artículos 84-M y 84-N del Código Fiscal de la Federación, por incurrir en las infracciones relacionadas por incumplir con las obligaciones contenidas en los diversos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies de ese ordenamiento tributario.

Por otro lado, en relación con la regla miscelánea fiscal 2.8.1.23 debe prevalecer el sobreseimiento decretado, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente:

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

...

XII. *Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)*"

De la norma transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la referida Ley y, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia o, que únicamente contengan criterios conceptuales que no tienen efecto alguno en su esfera de derechos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, tiene la calidad de quejoso aquella persona que

Asimismo, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de Amparo.

El principio de instancia de parte agraviada consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y solo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.

Este principio es requisito básico para que el juicio de amparo pueda iniciarse ya que, sin la promoción del agraviado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En el caso debe advertirse el contenido de la citada regla miscelánea, que establece lo siguiente:

Información que mantendrán los notarios, corredores y cualquier otra persona sobre beneficiarios controladores

2.8.1.23. Para los efectos del artículo 32-B Ter, tercer párrafo del CFF, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener y conservar, además de la información señalada en la regla 2.8.1.22., fracciones I a XII, la siguiente:

I. Datos de identificación de la notaría, correduría, oficina, así como de la persona titular de ellas ante quienes se haya formalizado el contrato o acto jurídico que dio lugar a la constitución de las personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica.

II. Fecha de constitución o celebración, conforme a la escritura, acta, póliza, minuta, similar o equivalente que dé soporte a la constitución de la persona moral o celebración del fideicomiso o figura jurídica.

III. El nombre completo de quienes constituyen, integran o son parte de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o participaron en la celebración del fideicomiso o figura jurídica.

IV. Importe del capital social de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o del patrimonio del fideicomiso o figura jurídica.

V. En caso de que con su intervención la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica efectúe modificaciones al capital fijo o capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica, según corresponda, la información soporte del monto y de los actos o contratos necesarios para ello.

VI. Nombre del administrador único o equivalente, en su caso, miembros del consejo de administración u órgano equivalente.

VII. Datos de inscripción, en su caso, ante los registros públicos o equivalentes.

Del contenido de la disposición, se conoce que se encuentra dirigida a los fedatarios públicos que intervengan en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos precisados en dicha disposición; de ahí que su contenido en modo alguno afecta la esfera jurídica de las quejas.

Contrariamente, los artículos 32-D, fracción IX, 42, fracciones XII y XIII, 48-A 84-M y 84-N de ese código tributario sí tienen tal naturaleza, sin que el quejoso haya demostrado acto concreto de aplicación que actualizara alguna afectación a su esfera jurídica. Por tanto, en lo concerniente a dichos numerales, tal como lo resolvió el juez, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

Igualmente, debe prevalecer el sobreseimiento decretado en relación con la regla miscelánea 2.8.1.23, aunque por diversas razones a las consideradas por el a quo y que han quedado precisadas en párrafos que anteceden.

En esas consideraciones, en términos del artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, **este tribunal reasume jurisdicción** y procede al análisis de las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el Juez de Distrito, así como las que hicieron valer las autoridades al interponer su recurso de revisión adhesiva, sólo por lo que hace a los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, del Código Fiscal de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Federación, y las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21 y 2.8.1.22, de la Resolución de Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés y sus anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27.

OCTAVO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.

En vista de los informes justificados y de los recursos de revisión adhesiva, se observa que las autoridades hacen valer las siguientes causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la ley de la materia:

1. **Fracción XII.** Las normas no afectan los intereses legítimos ni jurídicos del quejoso con su sola entrada en vigor, sino es necesario un acto concreto de aplicación, el cual no fue demostrado, esto es, que las normas son de naturaleza heteroaplicativa.
2. **Fracción XXIII, en relación con el artículo 77.** No pueden concretarse los efectos de una posible concesión de amparo debido a que no existe acto de aplicación.
3. **Fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6.** Los actos son futuros de realización incierta.

Estas causales **se desestiman** de conformidad con lo resuelto en el considerando próximo anterior, puesto que las autoridades aseveraron su actualización **por el único motivo de que las normas son de naturaleza heteroaplicativa, pero como se vio, no es así.**

1. Copia certificada por el Notario 135 de la Ciudad de México, del instrumento notarial ochenta y cuatro mil trescientos veinticuatro, del protocolo de la Notaría 140 de la propia entidad, en la que los apoderados de *****

y *****

ADELA RAMOS ZARATE
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.50
28/07/24 18:12:02



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Estatutos Sociales de *****

***** ***** ** ***** *****

5. Testimonio cuarenta y un mil doscientos setenta y cinco del protocolo de la Notaría número ciento ochenta de la Ciudad de México a través del cual el apoderado legal de

***** ***** ** ***** ***** ***** ** *****

***** , otorga poder a favor de ***** *****

6. Copia certificada por el Notario 180 de la Ciudad de México, de la escritura ciento dieciocho mil novecientos noventa y ocho del protocolo dela Notaria Quince del entonces Distrito Federal a través del que se constituyó la sociedad *****

*** *****

7. Copia certificada del Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración número F/523 de veintitrés de septiembre de 2008, en el que *****

***** ***** ** ***** ***** tiene el

carácter de fideicomitente.

8. Copia certificada del Contrato de Intermediación Bursátil de treinta de mayo de dos mil diecinueve, celebrado entre

***** y *****

***** ** ***** ***** ***** ** *****

9. Copia certificado de intermediación, celebrada entre

***** de veintiuno de mayo de dos mil quince.

- *****

En apoyo de lo anterior, se cita por analogía la
 udencia XX.2o. J/24, la cual este tribunal comparte, que
 ece:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.

Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.”³

3. Fracción XIII. La parte quejosa reconoció expresamente que no controvertió los artículos reclamados del Código Fiscal de la Federación a partir de su entrada en vigor, sino que lo hizo en el plazo correspondiente contado a partir de que empezó la vigencia de las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23.

4. Fracción XIV. Los actos reclamados fueron consentidos tácitamente al no haberse promovido la demanda dentro del plazo de treinta días contados a partir de que las normas entraron en vigor. Que no puede tomarse en cuenta, para tal efecto, el inicio

³ Registro digital: 168124. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Materia(s): Común. Tesis: XX.2o. J/24.

ADELA RAMOS ZARATE
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.50
28/07/24 18:12:02

Para desestimar la configuración de tales causales es preciso informar del contenido de la jurisprudencia 2a./J. 135/2016 (10a.), cuyo rubro y texto son los siguientes:

ADELA RAMOS ZARATE
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.56
28/07/24 18:12:02



de Justicia
den recla
ación en
ación de
de una
conjunta c
su esfera

arrogativa
por virtud
que e
ya, de n
se afect
nto, no cu
a impug
er una r
materia,
eda inte
ncia, me
correspo
a relació
generale
siendo h
tivas.

posiciones
va de n



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, del Código Fiscal de la Federación, imponen la obligación de hacer a los fiduciarios y las partes contratantes, entre otros, consistente en integrar como parte de su contabilidad la información para identificar a los beneficiarios controladores y realicen acciones para comprobar su identidad, así como para conservarla y mantenerla actualizada. Mientras que las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21 y 2.8.1.22 regulan cómo deberá realizarse esa obtención de información de los beneficiarios controladores y su identificación, también tienen naturaleza autoaplicativa.

Con lo cual queda acreditada la relación directa entre sí, en el sentido de que los dispositivos legales prevén la obligación y las reglas misceláneas desarrollan, complementan o detallan el contenido de aquéllos; por eso, la inconstitucionalidad de alguna norma puede afectar a las demás en su sentido, alcance o aplicación.

Por tanto, **no pueden actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, ésta en relación con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico y extemporaneidad),** no obstante que a algunas de ellas hubiesen iniciado su vigencia con anterioridad; ello porque todas pertenecen al mismo sistema normativo que, para efectos del juicio de amparo, es impugnabile en su integridad a partir del inicio de vigencia de la obligación aludida, **siempre que la demanda se hubiese interpuesto dentro del plazo previsto en el citado artículo 17, fracción I.**

El artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que el plazo para promover el juicio de amparo contra una norma general autoaplicativa es de treinta días, y el diverso 18 de dicho ordenamiento, que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor.

Por tanto, si la demanda se recibió el catorce de febrero del dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

México, resulta **oportuna** para reclamar el sistema normativo por su sola vigencia.

Sin que pase inadvertido que las autoridades manifestaron que las reglas vigentes para dos mil veintidós y para dos mil veintitrés son prácticamente del mismo contenido, es decir, que no constituyen un nuevo acto legislativo al no variar sustancialmente entre unas y otras, por lo que deben entenderse consentidas tácitamente; no obstante, pierden de vista que las reglas misceláneas sólo tienen **vigencia anual**, así que las personas sí pueden controvertirlas a través del juicio constitucional aunque prevén similares disposiciones.

6. Fracción XVI. La normativa combatida consiste en actos consumados de manera irreparable.

También debe desestimarse dicha causal, pues además de que el Presidente de la República al rendir su informe justificado no precisó por qué consideró que se configura dicho motivo de improcedencia, este tribunal tampoco advierte que así sea.

Los actos consumados de modo irreparable son aquellos que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, es decir, que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho.

Por el tema que informa, se cita la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, de rubro y texto siguientes:

ADELA RAMOS ZARATE
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.56
28/07/24 18:12:02



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar.”⁵ ■ ■ ■

7. Fracción XXIII. Tampoco se actualiza el motivo de improcedencia invocado por el Presidente de la República, en su informe justificado, relativo a que no era posible examinar en el juicio de amparo una omisión legislativa, de conformidad con el contenido en la fracción XXIII del artículo 61, anteriormente referido, en relación con la fracción II, párrafo primero, del numeral 107 constitucional.

Al respecto, este Tribunal Colegiado no advierte del contenido de la demanda de amparo, la parte que transcribe la referida autoridad responsable, máxime que de la lectura de los actos reclamados se puede advertir que, contrario a una omisión, los actos que la quejosa reclama constituyen regulaciones que incluso ya fueron publicadas a través de los medios de comunicación correspondientes, consecuentemente, no se está en el supuesto invocado

8. Fracciones XI y XXIII. En cuanto a las diversas causas de improcedencia que señalan se actualizan consistentes en:

a) La causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, de la

⁵ Registro digital: 171537. Instancia: Segunda Sala. Novena Época. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 171/2007.

b) La causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón que los conceptos de violación están en caminados a reclamar un perjuicio económico y no jurídico.

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 135/2001 sustentada por el Pleno del alto tribunal consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, página 5, que dispone:

Desestimadas las causas de improcedencia, sin que exista alguna pendiente de estudio, ni este tribunal advierte la actualización de alguna de oficio, **procede el análisis de los conceptos de violación** a través de los cuales se controvierte la constitucionalidad de los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, del Código Fiscal de la Federación, y las reglas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

2.8.1.20, 2.8.1.21 y 2.8.1.22, de la Resolución de Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés y sus anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27.

NOVENO. Estudio de los conceptos de violación. El cual se hará en orden distinto al propuesto, pues así lo permite el artículo 76 de la ley de la materia.

En primer lugar, resulta **inoperante** parte del **quinto concepto de violación** pues controvierte la constitucionalidad de los artículos 84-M y 84-N del Código Fiscal de la Federación, dado que por dichos numerales se confirmó el sobreseimiento en el juicio al no afectar los intereses jurídicos ni legítimos del quejoso con su sola entrada en vigor, sino era necesario la acreditación de un acto concreto de aplicación, lo cual no aconteció.

De igual manera, resultan **inoperante** el primer concepto de violación, pues el quejoso propuso como tema central que el sistema normativo reclamado **no supera el test de proporcionalidad**. Planteamiento del cual se ocupó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el **amparo en revisión 109/2023**, y que constituye un precedente de observancia obligatoria para este tribunal en términos del artículo 223 de la Ley de Amparo⁶.

Las consideraciones de la Segunda Sala para desestimar que la medida legislativa impuesta en el sistema normativo reclamado es desproporcionada fueron las siguientes:

6 Artículo 223. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de cuatro votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias.

35. *Al respecto, es criterio de esta Segunda Sala que el test de proporcionalidad es un procedimiento interpretativo para resolver conflictos fundamentales, apoyado en los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad, derivados de los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Federal, y que requiere el análisis de diversos elementos, según el nivel de escrutinio.*

- **Perseguir una finalidad objetiva y constitucionalmente válida:**

- **Ser proporcional en sentido estricto.** La medida restrictiva debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la restricción y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales.

37. En el entendido de que el cumplimiento de dichos criterios requiere de un mínimo y no de un máximo de justificación. Es decir, basta que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, y que el medio adoptado, así como la proporcionalidad en sentido estricto se encuentren justificadas al menos en un grado mínimo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

38. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 11/2018 (10a.)⁷ de rubro: “TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. LA INTENSIDAD DE SU CONTROL CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN, REQUIEREN DE UN MÍNIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN.”.

39. Una vez visto lo anterior, es necesario tener en cuenta que en la exposición de motivos de la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados (cámara de origen) en septiembre de dos mil veintiuno⁸, se precisó lo siguiente:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix}$$

26. Regulación en materia de beneficiario controlador

A fin de garantizar condiciones de igualdad y dar respuesta al llamado del Grupo de los Veinte (G20) que invitaba a remitirse a los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el concepto de beneficiario controlador, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (Foro Global) reforzó su norma de intercambio de información bajo petición, de cara a la segunda ronda de evaluaciones del Grupo de Revisión entre Pares, introduciendo en sus evaluaciones el concepto de beneficiario controlador, tal y como lo definió el GAFI.

Derivado de los acuerdos del Foro Global se introdujo el requisito de que la información del beneficiario controlador estuviera disponible para efectos del Estándar de Intercambio de Información Previa Petición con respecto de personas, estructuras jurídicas relevantes y cuentas bancarias.

Tanto el GAFI como el Foro Global tienen el mandato de evaluar a los países para confirmar la disponibilidad y la accesibilidad por parte de las autoridades tributarias de información confiable y actualizada sobre los beneficiarios controladores, de los vehículos jurídicos que sean empleados en cada país, por ejemplo, sociedades mercantiles, sociedades de personas, fideicomisos, fundaciones, entre otras, ya que esta información es relevante para combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, es decir, las transacciones y operaciones complejas

⁷ Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I, página 510, registro digital: 2016133.

⁸ Consultar Gaceta Parlamentaria Número 5864-D del Palacio Legislativo de San Lázaro, miércoles 8 de septiembre de 2021. Poder Legislativo Federal. <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2021/sep/20210908.html>
8 sep anexo D.qxd (diputados.gob.mx)

Con el objetivo de combatir dichas transacciones y operaciones, así como para efectos de intercambiar información, las administraciones tributarias deben tener acceso en tiempo y forma a la identidad de los beneficiarios controladores de todas las personas jurídicas y figuras jurídicas constituidas en el territorio, lo cual se traduce en la obligación por parte de las autoridades de garantizar la disponibilidad y el acceso a dicha información, además de ser correcta y estar actualizada.

Adicionalmente, la disponibilidad de la información sobre los beneficiarios controladores constituye un elemento clave de los estándares de transparencia fiscal internacional y se ha convertido en uno de los principales temas para fines del intercambio de información previa petición, debido a ello, este elemento ha sido incluido en las evaluaciones conducidas por el Foro Global; evaluaciones en las que eventualmente México participará en calidad de país evaluado. En consecuencia, es un compromiso ineludible que nuestro país cuente con un marco jurídico que garantice el cumplimiento de los estándares mínimos de transparencia.

El concepto de beneficiario controlador del GAFI, adoptado por el Foro Global, es el marco de referencia para todas las administraciones y debe entenderse como la persona o grupos de personas físicas que efectivamente controlen o se beneficien económicamente de una persona jurídica o figura jurídica, dicho control o beneficio económico se puede ejercer teniendo un porcentaje importante de las acciones de la entidad, o bien, ese porcentaje representa una participación significativa del derecho a voto o de la capacidad para nombrar o remover a los miembros directivos de la entidad.

En este contexto se somete a consideración de esa Soberanía adicionar en el Código Fiscal de la Federación los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies para establecer la obligación respecto de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, de obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a sus beneficiarios controladores en forma fidedigna, completa y actualizada.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Lo anterior, con la finalidad de que la administración tributaria cumpla los estándares internacionales que exigen niveles de transparencia mínimos en relación con los beneficiarios controladores de sociedades mercantiles, fideicomisos y otras figuras jurídicas con fines fiscales. En ese sentido, para los evasores de impuestos y otros infractores de la ley resultará más difícil ocultar sus actividades delictivas y los fondos ilícitos en jurisdicciones donde este tipo de norma, objeto de esta propuesta, se ha puesto en marcha en su totalidad.

Adicionalmente, los estándares internacionales de transparencia que se han precisado previamente requieren que la legislación de la jurisdicción evaluada contemple sanciones disuasorias ante el incumplimiento de obligaciones por parte de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica.

En este sentido, se somete a consideración de esa Soberanía la adición de los artículos 84-M y 84-N al Código Tributario, que prevén los supuestos de infracciones y sanciones en materia de beneficiario controlador. (...)’

40. Se desprende que los numerales cuya constitucionalidad aquí se cuestiona, tienen origen en la necesidad de garantizar condiciones de igualdad y dar respuesta al llamado del Grupo de los Veinte (G20) que invitaba a remitirse a los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el concepto de beneficiario controlador, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (Foro Global) reforzó su norma de intercambio de información bajo petición, de cara a la segunda ronda de evaluaciones del Grupo de Revisión entre Pares, introduciendo en sus evaluaciones el concepto de beneficiario controlador.

41. Así, que derivado de los acuerdos del Foro Global se introdujo el requisito de que la información del beneficiario controlador estuviera disponible para efectos del Estándar de Intercambio de Información Previa Petición con respecto de personas, estructuras jurídicas relevantes y cuentas bancarias.

42. Se precisó que tanto el GAFI como el Foro Global tienen el mandato de evaluar a los países para confirmar la disponibilidad y la accesibilidad por parte de las autoridades tributarias de información confiable y actualizada sobre los beneficiarios

43. Por ello, se estimó que, para combatir tales actos ilícitos, las administraciones tributarias deben tener acceso en tiempo y forma a la identidad de los beneficiarios controladores de todas las personas jurídicas y figuras jurídicas constituidas en el territorio, lo cual se traduce en la obligación por parte de las autoridades de garantizar la disponibilidad y el acceso a dicha información, además de ser correcta y estar actualizada.

45. En consecuencia, se consideró un compromiso ineludible que nuestro país cuente con un marco jurídico que garantice el cumplimiento de los estándares mínimos de transparencia.

47. Así, el Ejecutivo Federal sometió a consideración del Legislador Ordinario adicionar en el Código Fiscal de la Federación los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinques -normas generales aquí reclamadas-, para establecer la obligación respecto de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, de obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Tributaria, la información relativa a sus beneficiarios controladores en forma fidedigna, completa y actualizada.

48. Todo lo anterior, con la finalidad de que la administración tributaria cumpla los estándares internacionales que exigen niveles de transparencia mínimos en relación con los beneficiarios controladores de sociedades mercantiles, fideicomisos y otras figuras jurídicas con fines fiscales.

49. En ese sentido, se hizo hincapié en que para los evasores de impuestos y otros infractores de la ley, resultará más difícil ocultar sus actividades delictivas y los fondos ilícitos en jurisdicciones donde ese tipo de norma, objeto de la propuesta, se ha puesto en marcha en su totalidad.

50. Aunado a lo anterior, se expusieron los argumentos para incorporar al código normativo las sanciones con motivo de su incumplimiento.

51. Ahora bien, a juicio de esta Segunda Sala, las normas generales adicionadas al Código Fiscal de la Federación persiguen un fin constitucionalmente objetivo y válido.

52. Conviene tener en cuenta que de conformidad con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁹, es obligación contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, lo que se traduce en una reducción del patrimonio de las personas; circunstancia que se encamina a la satisfacción de las necesidades colectivas.

53. Por ello es válido que la legislación prevea los mecanismos que permitan combatir las actuaciones de los particulares que pudieran encaminarse a eludir el cumplimiento de dicha obligación.

54. En consecuencia, el legislador se encuentra autorizado para regular ciertas conductas tendientes a combatir la evasión, fraudes o actos ilícitos, que si bien pueden restringir la esfera de derechos de los particulares, incluyendo su patrimonio -lo que en el caso no acontece-, de ello depende la eficacia del cumplimiento de las finalidades sociales que la Constitución Federal impone al Estado.

⁹ **Artículo 31.** Son obligaciones de los mexicanos:
(...)

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

56. Consecuentemente, el que la finalidad de las disposiciones impugnadas sea combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, así como el cumplimiento a diferentes compromisos internacionales, debe considerarse constitucionalmente objetiva y válida.

58. Como se dijo, la medida que establece la legislación se traduce en la obligación respecto de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, de obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a sus beneficiarios controladores en forma fidedigna, completa y actualizada.

60. En el presente asunto, se concluye que la obligación implementada es una medida racional y adecuada para alcanzar la meta deseada, toda vez que está justificada la relación entre el objetivo o finalidades planteados y los procedimientos establecidos para su consecución.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

61. Efectivamente, toda vez que la obligación impuesta a los destinatarios de la norma de obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a sus beneficiarios controladores, es adecuada para combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, en virtud de que les otorga más elementos a las administraciones tributarias para tener acceso en tiempo y forma a la identidad de los beneficiarios controladores de todas las personas jurídicas y figuras jurídicas constituidas en el territorio, con lo que se garantiza la disponibilidad y el acceso a dicha información, además de ser correcta y estar actualizada.

62. Con ello, esta Segunda Sala estima que se fortalece al sistema tributario para verificar si eventualmente, existen actos que pudieran derivar en evasión fiscal, financiamiento del terrorismo y lavado de activos, en detrimento, desde luego, del interés general.

63. Inclusive, es criterio de este Alto Tribunal que, para conseguir los fines buscados, como el combate a prácticas de evasión fiscal, el legislador cuenta con diversas posibilidades, como podrían ser, entre otros, el establecimiento de multas por el incumplimiento de obligaciones fiscales, así como el diseño de un esquema de control administrativo mediante el ejercicio de facultades de comprobación, gestión o vigilancia. Asimismo, las autoridades del Estado se encuentran facultadas para tipificar ciertas conductas como delitos fiscales.¹⁰

64. Pues bien, al expedir la norma general reclamada, el legislador optó por imponer a los contribuyentes destinatarios la obligación de obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la

10 Ver jurisprudencia 2a./J. 22/2020 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 76, marzo de 2020, Tomo I, página 459, registro digital: 2021743, de rubro y texto: **“FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.** Desde la perspectiva del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal, conforme al artículo 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede ejercer facultades de gestión (asistencia, control o vigilancia) y de comprobación (inspección, verificación, determinación o liquidación) de la obligación de contribuir prevista en el numeral 31, fracción IV, del mismo Ordenamiento Supremo, concretizada en la legislación fiscal a través de la obligación tributaria. Así, dentro de las facultades de gestión tributaria se encuentran, entre otras, las previstas en los numerales 22, 41, 41-A y 41-B (este último vigente hasta el 31 de diciembre de 2019) del Código Fiscal de la Federación; en cambio, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se establecen en el artículo 42 del código citado y tienen como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar las referidas obligaciones, facultades que encuentran en el mismo ordenamiento legal invocado una regulación y procedimiento propios que cumplir.”

65. El sistema normativo únicamente impone a los destinatarios la obligación de obtener y conservar la multicitada información de los beneficiarios controladores, con lo que se pretende suprimir prácticas evasivas o prácticas ilícitas.

66. Es por ello que se concluye que la medida adoptada constituye un medio apto para conducir al fin u objetivo perseguido, existiendo una relación de instrumentalidad medio-fin.

67. Por último, se procede a analizar si la obligación contenida en el sistema normativo es estrictamente proporcional en relación con la finalidad buscada; esto es, debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la restricción y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales.

68. *Se ha mencionado en reiteradas ocasiones que la medida en examen no constituye una prohibición, más bien, se trata de una obligación de entregar información de los beneficiarios controladores al sistema tributario.*

69. Si bien, de cierta manera, la medida impacta en la información de los beneficiarios controladores, lo cierto es que como se indicó en la exposición de motivos, de conformidad con los compromisos internacionales, esto es, en los acuerdos del Foro Global, se introdujo el requisito de que la información del beneficiario controlador estuviera disponible para efectos del Estándar de Intercambio de Información Previa Petición con respecto de personas, estructuras jurídicas relevantes y cuentas bancarias.

70. Así, los contribuyentes destinatarios de la norma están obligados a obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a sus beneficiarios controladores, lo cual, tiende a combatir prácticas como la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos; de tal suerte que respeta una correspondencia entre la importancia del fin buscado y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales.

71. Inclusive, se estima prudente la entrega a la autoridad hacendaria de información de los beneficiarios controladores, ya



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

que éstos, en su carácter de personas físicas se ven beneficiados con las operaciones que realizan los contribuyentes primigenios. Por tanto, es válido concluir que la entrega de su información al Sistema de Administración Tributaria es proporcional con el fin buscado. Máxime que no se infiere que, a la postre, dicha información tenga el carácter de pública, sino que es sólo para control de los entes fiscalizadores.

72. En las relatadas consideraciones, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la norma reclamada es proporcional en sentido estricto.

73. Toda vez que la medida impuesta obedece a una finalidad constitucionalmente válida y objetiva, es adecuada, racional y proporcional en sentido estricto, debe declararse infundado el planteamiento en estudio, debido a que la norma reclamada supera el test de proporcionalidad.”

Como se ve, contrario a lo que sostuvo el quejoso, la medida legislativa impuesta en el sistema normativo reclamado **sí supera el test de proporcionalidad.**

La Segunda Sala del Alto Tribunal ya definió que la obligación respecto de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica de obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información relativa a sus beneficiarios controladores, **obedece a una finalidad constitucionalmente válida y objetiva, es adecuada, racional y proporcional en sentido estricto.**

Tiene una **finalidad constitucionalmente objetiva y válida** porque consiste en combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, así como el cumplimiento a diferentes compromisos internacionales.

mentada e
miento de
e les oto
s para ten
beneficiarios
s constitu
dad y el
estar actual
erificar si
aquellos il

porcional
tarios de
mo parte
de Ac
s beneficia
ticas con
no y el lav
ondencia
perjudicial
titucionale
ormación t
ol de los e

Finalmente, **es proporcional en sentido estricto**, ya que los contribuyentes destinatarios de la norma están obligados a obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a sus beneficiarios controladores, lo cual, tiende a combatir prácticas como la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos; de tal suerte que respeta una correspondencia entre la importancia del fin buscado y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales. Máxime que no se infiere que, a la postre, dicha información tenga el carácter de pública, sino que es sólo para control de los entes fiscalizadores.

De ahí lo **inoperante** de los conceptos de violación en análisis, dado que van en sentido contrario a lo que ya resolvió el máximo órgano jurisdiccional del país y que es de observancia obligatoria para este tribunal colegiado.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

De igual forma resulta lo señalado por la parte quejosa en el **concepto de violación cuarto**, por el que manifestó que el sistema normativo contraviene el principio de legalidad jurídica ya que no es claro respecto de los destinatarios de la norma, ni se cumple el principio de legalidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, al referirse a “cualquier otra figura jurídica”.

No obstante, la Segunda Sala también analizó esa unidad jurídica a la luz de dicho principio constitucional y determinó que las disposiciones reclamadas lo respetan, tal como se advierte a continuación:

“BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA INFORMACIÓN FIDEDIGNA, COMPLETA Y ACTUALIZADA RELACIONADA CON AQUÉLLOS, AL ESTABLECER A QUIÉNES LES RECAE TAL CARÁCTER Y EMPLEAR LA EXPRESIÓN "CUALQUIER OTRA FIGURA JURÍDICA", NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022).

Hechos: Diversas personas morales promovieron juicio de amparo indirecto en el que plantearon la inconstitucionalidad de disposiciones relacionadas con la obligación de identificar, obtener, conservar y proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información fidedigna, completa y actualizada de los beneficiarios controladores.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el sistema normativo integrado por los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B

Justificación: Del artículo 32-B Quáter, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se desprende que el beneficiario controlador es una persona física o un grupo de personas físicas que directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente. Por su parte, la fracción II de dicho precepto prevé que el beneficiario controlador es quien, de manera directa, indirecta o de forma contingente, ejerza el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, precisando que se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, puede o pueden imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes; mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 15 % (quince por ciento) del capital social, o bien, dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Además, dicho precepto establece que tratándose de fideicomisos, se considerarán beneficiarios controladores el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario o fideicomisarios, así como cualquier otra persona involucrada y que ejerza, en última instancia, el control efectivo en el contrato, aun de forma contingente. Finalmente, dicha norma establece que el Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de dicho artículo y que para su interpretación serán aplicables las Recomendaciones emitidas por



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), acorde a los estándares internacionales de los que México forma parte, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas. En esos términos, la norma no deja en incertidumbre jurídica a los sujetos obligados, pues de su lectura se advierte con claridad a quiénes les recae el carácter de "beneficiario controlador" por ejercer u obtener determinados derechos y/o el control de la entidad o figura jurídica de que se trate. Además, para efectos del sistema analizado, lo relevante no es la definición de la expresión "cualquier otra figura jurídica", pues si bien es cierto que por su amplitud, efectivamente, puede ser cualquiera, también lo es que está condicionada a que la persona física obtenga el beneficio derivado de su participación mediante algún acto jurídico, o en última instancia ejerza derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga de manera eventual, o bien, ejerza el control de la entidad o acto correspondiente."

Por analogía, se cita en apoyo de lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 14/97, de rubro y texto siguientes:

“AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado.”¹¹

En el **segundo concepto de violación**, las quejas señalan que el artículo 32-B Ter del Código Fiscal de la Federación que permite a las autoridades fiscales requerir a las personas morales, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios en

¹¹ Registro digital: 198920. Instancia: Primera Sala. Novena Época. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 14/97.

Apuntan que en tales condiciones el artículo 32-Bis Ter del Código Fiscal de la Federación es violatorio del derecho fundamental de seguridad jurídica de los gobernados, en la medida en que la autoridad no se ubica en la excepción constitucional ejerciendo facultades de fiscalización, que le permitiría requerir información y documentos, conforme a los procedimientos establecidos para el ejercicio de facultades de comprobación.

Asegura que el artículo 32-B Ter del Código Fiscal Federal es inconstitucional pues faculta a la autoridad fiscal a actuar de forma arbitraria, pudiendo requerir la entrega de información contable que contiene la relación de todos y cada uno de sus beneficiarios controladores, sin que para ello deba existir algún



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

motivo o razón que lo justifique, y que además impide a la parte quejosa y a sus beneficiarios controladores los motivos reales de la solicitud o la conclusión de la investigación. No se identifica al sujeto materia de investigación, un objeto, una finalidad. Simplemente la información se entrega porque el Servicio de Administración Tributaria así lo requiere.

Sostiene que la entrega de dicha información tan delicada como la identidad misma de los clientes de la quejosa, sin salvaguarda alguna, ni para la quejosa ni para los beneficiarios controladores mismos, deja en un completo estado de indefensión a las partes involucradas pues en realidad el Servicio de Administración Tributaria puede solicitar en cualquier momento, “cuando lo requiera” información que utilizara incluso para programar actos de fiscalización sin tener siquiera que notificar o informar al sujeto obligado o al beneficiario controlador.

No asiste razón al quejoso.

Tomando en consideración de nueva cuenta lo resuelto por el Alto Tribunal, en el Amparo en Revisión 199/2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el principio de seguridad jurídica apuntó:

74. En este sentido, se procede a analizar el argumento efectivamente planteado por las quejas, para lo cual resulta relevante precisar que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, prevé el derecho fundamental de seguridad jurídica que tienen los individuos, consistente en que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado.

- ADELA RAMOS ZARATE
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.56
28/07/24 18:12:02



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 142. La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades:

1. El Fiscal General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;

II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;

III. El Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;

IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;

VI. El Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para solicitar los estados de cuenta y cualquier otra información relativa a las cuentas personales de los servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la investigación de que se trate;

VII. La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuáles se administren o ejerzan recursos públicos federales;

VIII. El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de investigación o auditoría para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos federales.

La solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá formularse en todo caso, dentro del procedimiento de verificación a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y

IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones legales, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las autoridades electorales de las entidades federativas solicitarán y obtendrán la información que resulte necesaria también para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de la unidad primeramente mencionada.

Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores solicitarán las noticias o información a que se refiere este artículo en el ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que les resulten aplicables.

Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deberán formularse con la debida fundamentación y motivación, por



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los servidores públicos y las instituciones señalados en las fracciones I y VII, y la unidad de fiscalización a que se refiere la fracción IX, podrán optar por solicitar a la autoridad judicial que expida la orden correspondiente, a efecto de que la institución de crédito entregue la información requerida, siempre que dichos servidores o autoridades especifiquen la denominación de la institución, el número de cuenta, el nombre del cuentahabiente o usuario y demás datos y elementos que permitan su identificación plena, de acuerdo con la operación de que se trate.

Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación indebida del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten, así como tampoco la obligación de proporcionar la información que les sea solicitada por el Banco de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Se entenderá que no existe violación al secreto propio de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley, en los casos en que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en la ley que norma su gestión, requiera la información a que se refiere el presente artículo.

Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones al primer párrafo del presente artículo, sólo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de ley y, respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta confidencialidad, aun cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier otra forma revele información en

Las instituciones de crédito deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les formule en virtud de las peticiones de las autoridades indicadas en este artículo, dentro de los plazos que la misma determine. La propia Comisión podrá sancionar a las instituciones de crédito que no cumplan con los plazos y condiciones que se establezca, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 al 110 de la presente Ley.

La Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los requisitos que deberán reunir las solicitudes o requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, a efecto de que las instituciones de crédito requeridas estén en aptitud de identificar, localizar y aportar las noticias o información solicitadas.

80. El numeral en cuestión previene el denominado secreto bancario (dentro del cual se encuentra el secreto fiduciario y bursátil) que, en términos generales, es el deber que tienen las instituciones de crédito de **no proporcionar información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones**, salvo cuando así lo disponga la ley o cuando lo faculte el mismo cliente.
81. Las razones del legislador para el secreto bancario son, básicamente, la necesidad de establecer confianza entre el público y el banco, que no podría existir si éstos no conservan la confidencialidad de los intereses del público.
82. Así, el secreto bancario presenta una doble vertiente, por un lado, impone la **obligación a las instituciones de crédito** de resguardar la información de los usuarios y, por otra, el **derecho de oponerse** a la entrega de información bancaria del cliente en los supuestos que no se encuentren previstos en la ley.
83. Ahora bien, resulta de suma importancia resaltar que la información y documentación que goza de la secrecía bancaria, es la relativa a las siguientes operaciones y servicios:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 46. Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes:

I. Recibir depósitos bancarios de dinero:

a) *A la vista;*

b) Retirables en días preestablecidos;

c) *De ahorro, y*

d) A plazo o con previo aviso;

II. Aceptar préstamos y créditos:

III. Emitir bonos bancarios:

IV. Emitir obligaciones subordinadas:

V. Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior;

VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos;

VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente;

VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de cartas de crédito;

IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente Ley y de la Ley Mercado de Valores;

X. Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas, en los términos de esta Ley;

XI. Operar con documentos mercantiles por cuenta propia;

XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad;

XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones;

XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos o valores y en general de documentos mercantiles;

XVIII. Hacer servicio de caja y tesorería relativo a títulos de crédito, por cuenta de las emisoras:

XX. *Desempeñar el cargo de albacea;*

XXI. Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias;

XXII. Encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los hechos por corredor público o perito;



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

XXIII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda, y

XXIV. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos.

XXV. Realizar operaciones derivadas, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que expida el Banco de México, en las cuales se establezcan las características de dichas operaciones, tales como tipos, plazos, contrapartes, subyacentes, garantías y formas de liquidación;

XXVI. Efectuar operaciones de factoraje financiero:

XXVI bis. Emitir y poner en circulación cualquier medio de pago que determine el Banco de México, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que éste expida, en las cuales se establezcan entre otras características, las relativas a su uso, monto y vigencia, a fin de propiciar el uso de diversos medios de pago;

XXVII. Intervenir en la contratación de seguros para lo cual deberán cumplir con lo establecido en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y en las disposiciones de carácter general que de la misma emanen, y

XXVIII. Las análogas o conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

84. Bajo este contexto, resulta necesario verificar si la información que exige el sistema normativo reclamado, se encuentra protegida por el secreto bancario, para lo cual se reproduce su contenido:

Código Fiscal de la Federación

Artículo 32-B Ter. Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, en la forma y términos que dicho órgano

El Servicio de Administración Tributaria notificará a las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica obligada; así como, a terceros con ellos relacionados, la solicitud de información de sus beneficiarios controladores de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento. Dicha información deberá ser proporcionada dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la solicitud. Este plazo se podrá ampliar por las autoridades fiscales por diez días más, siempre y cuando medie solicitud de prórroga debidamente justificada y ésta se presente previo al cumplimiento del plazo anteriormente mencionado.

Los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, así como las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero para fines de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tratándose de la información relativa a cuentas financieras, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad, para proporcionarla al Servicio de Administración Tributaria cuando dicha autoridad así lo requiera, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

Quando el Servicio de Administración Tributaria requiera a los sujetos referidos en el párrafo anterior la información relativa a los beneficiarios controladores, el plazo para proporcionarla será el establecido en el segundo párrafo de este artículo. Este plazo se podrá ampliar por la autoridad fiscal por diez días más, siempre y cuando medie solicitud de prórroga debidamente justificada y ésta se presente previo al cumplimiento del plazo anteriormente mencionado.

Los registros públicos en la Ciudad de México y en los Estados de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro



para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, coadyuvarán con el Servicio de Administración Tributaria, a través de la celebración de convenios de colaboración o de intercambio de información y en cualquiera otra forma que autoricen las disposiciones aplicables, para corroborar la exactitud y veracidad de la información que sea proporcionada por las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica obligada; terceros con ellos relacionados; personas que intervengan en la celebración de contratos o actos jurídicos, así como entidades financieras e integrantes del sistema financiero relativa a beneficiarios controladores.

Artículo 32-B Quáter. Para efectos de este Código se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que:

I. Directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente.

II. Directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, puede o pueden:

a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes.

b) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social o bien.

c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

Tratándose de fideicomisos, se considerarán beneficiarios controladores el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario o fideicomisarios, así como cualquier otra persona

Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo serán aplicables las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, acorde a los estándares internacionales de los que México forma parte, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas.

El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de este artículo.

Criterios para la determinación de la condición de beneficiario controlador de las personas morales

Para efectos de la obtención de la información a que se refiere el artículo 32-B Ter del CFF, las personas morales deberán



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios controladores, indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona moral, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad, en los casos en que el beneficiario controlador lo sea indirectamente. Se entiende por cadena de titularidad el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta, a través de otras personas morales. Asimismo, las personas morales también deberán identificar, verificar y validar la información relativa a la cadena de control, en los casos en los que el beneficiario controlador lo sea por medios distintos a la propiedad. Se entiende por cadena de control el supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica.

Quando no se identificar a persona física alguna bajo los criterios establecidos en esta regla, en relación con el artículo 32-B Quáter del CFF, se considerará como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo se considerará como beneficiario controlador de la persona moral.

Mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador

2.8.1.21. Para los efectos del artículo 32-B Ter, primer y tercer párrafos del CFF, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, deberán implementar procedimientos de control internos debidamente documentados. Estos procedimientos serán todos aquellos que sean razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir.

Para efectos de lo establecido en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies del CFF, a efecto de obtener y conservar información sobre la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura

I. Identificar, verificar y validar adecuadamente al beneficiario controlador de las personas morales, los fideicomisos y de cualquier otra figura jurídica.

II. Obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada acerca de los datos de la identidad del beneficiario controlador y demás datos que se establecen en la regla 2.8.1.22., para lo cual, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, deben establecer procedimientos para que la(s) persona(s) que pueda(n) considerarse beneficiario(s) controlador(es) les proporcionen información actualizada de su condición como tales, así como que les informen de cualquier cambio en su condición, para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 32-B Quinquies, primer párrafo del CFF.

III. Conservar la información del beneficiario controlador, de la cadena de titularidad y de la cadena de control, la documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de control internos a que se refiere el primer párrafo de esta regla, durante el plazo que señala el artículo 30 del CFF.

IV. Proporcionar, permitir el acceso oportuno de las autoridades fiscales y otorgarles todas las facilidades para que accedan a la información, registros, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores.

Cuando el SAT requiera de los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, información relativa a los beneficiarios controladores,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

lo hará a través de una solicitud de información que les notificará de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del CFF.

Las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero, para fines de la Ley del ISR, cumplirán con las obligaciones que establece el artículo 32-B Ter, tercer párrafo del CFF de conformidad con lo que establecen los Anexos 25 y 25-Bis.

Información que mantendrán las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica sobre sus beneficiarios controladores

2.8.1.22. Para los efectos del artículo 32-B Ter, primer párrafo del CFF, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán integrar como parte de su contabilidad la siguiente información con respecto de cada beneficiario controlador:

I. Nombres y apellidos completos, los cuales deben corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad.

II. Alias.

III. Fecha de nacimiento. Cuando sea aplicable, fecha de defunción.

IV. Sexo.

V. País de origen y nacionalidad. En caso de tener más de una, identificarlas todas.

VI. CURP o su equivalente, tratándose de otros países o jurisdicciones.

VII. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales.

VIII. Tipo y número o clave de la identificación oficial.

IX. Clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, para efectos fiscales.

X. Estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina o del concubinario, de ser aplicable.

XI. Datos de contacto: correo electrónico y números telefónicos.

XII. Domicilio particular y domicilio fiscal.

XIII. Relación con la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso o la figura jurídica, según corresponda.

XIV. Grado de participación en la persona moral o en el fideicomiso o figura jurídica, que le permita ejercer los derechos de

XV. Descripción de la forma de participación o control (directo o indirecto).

XVII. Lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentren depositados o en custodia.

XVIII. Fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

XIX. En su caso, proporcionar los datos mencionados en las fracciones que anteceden respecto de quién o quiénes ocupen el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, de cada miembro de dicho consejo.

XX. Fecha en la que haya acontecido una modificación en la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

XXI. Tipo de modificación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

XXII. Fecha de terminación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

En los casos de cadena de titularidad o cadena de control a que se refiere la regla 2.8.1.20. se debe contar adicionalmente con la siguiente información:

I. Nombre, denominación o razón social de la o las personas morales, fideicomisos o figuras jurídicas que tienen participación o control sobre la persona moral, fideicomisos o figuras jurídicas.

II. País o jurisdicción de creación, constitución o registro.

III. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales.

IV. Clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, para efectos fiscales.

V. Domicilio fiscal.

Información que mantendrán los notarios, corredores y cualquier otra persona sobre beneficiarios controladores

2.8.1.23. Para los efectos del artículo 32-B Ter, tercer párrafo del CFF, los notarios, corredores y cualquier otra persona que



intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener y conservar, además de la información señalada en la regla 2.8.1.22., fracciones I a XII, la siguiente:

I. Datos de identificación de la notaría, correduría, oficina, así como de la persona titular de ellas ante quienes se haya formalizado el contrato o acto jurídico que dio lugar a la constitución de las personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica.

II. Fecha de constitución o celebración, conforme a la escritura, acta, póliza, minuta, similar o equivalente que dé soporte a la constitución de la persona moral o celebración del fideicomiso o figura jurídica.

III. El nombre completo de quienes constituyen, integran o son parte de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o participaron en la celebración del fideicomiso o figura jurídica.

IV. Importe del capital social de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o del patrimonio del fideicomiso o figura jurídica.

V. En caso de que con su intervención la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica efectúe modificaciones al capital fijo o capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica, según corresponda, la información soporte del monto y de los actos o contratos necesarios para ello.

VI. Nombre del administrador único o equivalente, en su caso, miembros del consejo de administración u órgano equivalente.

VII. Datos de inscripción, en su caso, ante los registros públicos o equivalentes.

85. El artículo 32-B Ter establece en términos generales la obligación de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, de **obtener y conservar**, como parte de su contabilidad, y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

- *Quien o quienes directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico.*

- Quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente.

- *Quien o quienes directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.*

- El fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario o fideicomisarios, así como cualquier otra persona involucrada y que ejerza, en última instancia, el control efectivo en el contrato, aún de forma contingente.

87. Finalmente, el artículo 32-B Quinquies establece la obligación de mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores.

88. Por su parte, en términos generales, las reglas de carácter general prevén los criterios para determinar la existencia del beneficiario controlador tratándose de las personas morales (2.8.1.20.), los procedimientos para la identificación, obtención y conservación de la información de los beneficiarios controladores (2.8.1.21.), la información específica que deberá integrarse en la contabilidad respecto de cada beneficiario controlador (2.8.1.22.), así como la información que están obligados a obtener y conservar los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica.

89. En este contexto se advierte que es **infundado** el argumento de las recurrentes en el sentido de que se encuentran imposibilitadas para proporcionar la información de los beneficiarios controladores cuando se trata de fideicomisos o vehículos de inversión pública, atento a que, al tratarse de instituciones de crédito, se encuentran sujetas al secreto fiduciario y bursátil.
90. Lo anterior, pues pierden de vista que la información que requiere el sistema normativo reclamado no es la relacionada con las operaciones o servicios que la institución de crédito fiduciaria lleva a cabo con sus clientes y usuarios.
91. Ni siquiera se desprende que la información solicitada sea la derivada de las operaciones del fideicomiso o las operaciones en la bolsa de valores, sino la **identificación de las personas físicas que finalmente poseen o controlan a la entidad jurídica a través de la titularidad directa o indirecta, o el control de acciones o de derechos de voto, u otra forma de participación en la titularidad de la entidad, o que ejercen el control por otros medios, es decir, la relativa al beneficiario controlador.**
92. En efecto, en el presente asunto se plantea la posibilidad que una sociedad contemple dentro de su estructura accionaria a un fideicomiso, caso en el cual es importante referirse al artículo 32-B Quáter, conforme al cual, tratándose de fideicomisos, se considerarán beneficiarios controladores el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario o fideicomisarios, así como cualquier otra persona involucrada y que ejerza, en última instancia, el control efectivo en el contrato, aún de forma contingente.
93. En este sentido, atento a la finalidad de la figura del beneficiario controlador que busca determinar quién es la **persona física** que en última instancia ejerce el control, se advierte que la información que deberá proporcionar la fiduciaria es la relativa

94. Lo cual se advierte incluso de la Recomendación 25 del GAFI, así como de las notas interpretativas que a continuación se citan:

Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de otras estructuras jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. En particular, los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomisos expresos, **incluyendo información sobre el fideicomitente, fiduciario y los beneficiarios, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente.** Los países deben considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control por las instituciones financieras y las APNFD que ejecutan los requisitos establecidos en las Recomendaciones 10 y 22.

**NOTA INTERPRETATIVA DE LA RECOMENDACIÓN 25
(TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS ESTRUCTURAS
JURÍDICAS)**

1. Los países deben **exigir a los fiduciarios de todo fideicomiso expreso regido bajo sus leyes, que obtengan y conserven información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final del fideicomiso.** Ello debe incluir **información sobre la identidad del fideicomitente, el(los) fiduciario(s), el protector (de haber alguno), los beneficiarios o clase de beneficiarios, y cualquier otra persona natural que ejerza el control final efectivo sobre el fideicomiso.** Los países deben también exigir a los fiduciarios de todo fideicomiso regido bajo sus leyes, que conserven información básica sobre otros agentes regulados del fideicomiso y proveedores de servicios para el fideicomiso, incluyendo asesores o gerentes de inversión, contadores y asesores fiscales.
2. Todos los países deben tomar medidas para asegurar que los fiduciarios revelen su estatus a las instituciones financieras y las APNFD cuando, en calidad de fiduciarios, crean una relación comercial o realizan una transacción ocasional por encima del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*umbral. Los fiduciarios no deben tener prohibido por ley o medios coercitivos suministrar a las autoridades competentes información relativa al fideicomiso; o suministrar a las instituciones financieras y APNFD, cuando se solicite, **información sobre el beneficiario final y los activos del fideicomiso a mantener o administrar bajo los términos de la relación comercial.***

3. Se exhorta a los países a asegurar que otras autoridades relevantes, personas y entidades, conserven información sobre todos los fideicomisos con los que tengan una relación. Las posibles fuentes de información sobre los fideicomisos, fiduciarios y activos fiduciarios son:
 - (a) Registros (ej.: un registro central de fideicomisos o activos fiduciarios) o registros de activos en el caso de tierras, propiedades, vehículos, acciones u otros bienes
 - (b) Otras autoridades competentes que tienen información sobre los fideicomisos y los fiduciarios (ej.: autoridades fiscales que recopilan información sobre activos e ingresos relativos a los fideicomisos).
 - (c) Otros agentes y proveedores de servicios para el fideicomiso, incluyendo asesores o administradores de inversión, abogados o proveedores de servicios fiduciarios y societarios.
4. Las autoridades competentes y en particular las autoridades del orden público, deben contar con todas las facultades necesarias para obtener acceso a tiempo a la información en poder de los fiduciarios y otras partes, en particular la información en manos de las instituciones financieras y las APNFD sobre: (a) el beneficiario final; (b) la residencia del fiduciario; y (c) los activos que están en poder de la institución financiera o las APNFD o que son manejados por la institución financiera o la APNFD, con respecto a fiduciarios con los que tienen una relación comercial o para quienes realizan una transacción ocasional.
5. Debe exigirse a los fiduciarios profesionales que mantengan la información a la que se hace referencia en el párrafo 1 durante, al menos, cinco años, luego de que cese su vinculación con el fideicomiso. Se insta a los países a que exijan a los fiduciarios no profesionales y otras autoridades, personas y entidades a las que se hace referencia en el párrafo 3 anterior, a que mantengan la información durante al menos cinco años.
6. Debe exigirse a los países que toda información conservada en virtud del párrafo 1 anterior, debe ser mantenida exacta y actualizada

7. Los países deben considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre los fideicomisos en poder de otras autoridades, personas y entidades a las que se hace referencia en el párrafo 3, por las instituciones financieras y las APNFD que ejecutan los requisitos plasmados en las Recomendaciones 10 y 22.
8. En el contexto de esta Recomendación, los países no tienen que otorgar reconocimiento legal a los fideicomisos. Los países no tienen que incluir los requisitos de los párrafos 1, 2 y 6 en la legislación, siempre que existan las obligaciones apropiadas a este efecto para los fiduciarios (ej.: a través del derecho común o precedentes). (...)

Sin que se pierda de vista que la identificación de las personas físicas que ejercen el control de una persona moral, fideicomiso o figura jurídica, ya sea directa o indirectamente, deriva de la estructura que estas deciden crear, por lo que la información correspondiente no es desconocida y en todo caso, conforme a las disposiciones citadas, son los propios beneficiarios controladores quienes deberán proporcionar su información a los sujetos obligados a conservarla, por lo que esta sí se encuentra a su disposición.”

ADELA RAMOS ZARATE
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.56
28/07/24 18:12:02



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Para continuar el estudio, es necesario traer a cuentas la tesis 1a. CIII/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 1, página 1094, de rubro y texto siguiente:

“FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. SUS DIFERENCIAS. Desde la

LAS AUTORIDADES FISCALES. SUS DIFERENCIAS. Desde la perspectiva del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal está facultada constitucionalmente en el artículo 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ejercer facultades de gestión (asistencia, control o vigilancia) y de comprobación (inspección, verificación, determinación o liquidación) de la obligación de contribuir prevista en el numeral 31, fracción IV, del mismo ordenamiento supremo, concretizada en la legislación fiscal a través de la obligación tributaria. Ahora, dentro de las facultades de gestión tributaria se encuentran, entre otras, la prevista en el numeral 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2010, por medio de la cual la autoridad fiscal requiere a los contribuyentes la presentación de los documentos por los cuales se acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, en caso de no hacerlo, procederá a imponer la multa correspondiente con el objeto de controlar y vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones. En cambio, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se encuentran previstas en el numeral 42 del código tributario invocado, y tienen como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar las citadas obligaciones, facultades que encuentran en el mismo ordenamiento legal invocado una regulación y procedimiento propios que cumplir.

En esa tesitura, la obligación de conservar y en su oportunidad proporcionar la información y documentación, se encuentra encaminada a controlar y vigilar que los contribuyentes hayan cumplido con sus obligaciones fiscales.

Esto es, debe precisarse que la actividad que llevarán a cabo las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, será la de conservar diversa documentación que puede ser requerida por el Servicio de Administración Tributaria, cuando así lo solicite; ello en razón del ejercicio de sus facultades de gestión.

En consecuencia devienen de ineficaces los argumentos expuestos por las quejas, ya que no se conculca el derecho a la seguridad jurídica, puesto que con la documentación que se solicite, no se entraña el ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad tributaria; de manera que, no está obligada a cumplir con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución, ni 48 del Código Fiscal de la Federación, como si se tratara de una autoridad fiscalizadora.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En ese sentido, las obligaciones que impone el artículo 32-B ter del Código Fiscal de la Federación, a las quejas no entrañan el ejercicio de facultades de comprobación, sino que se trata de obligaciones de carácter formal, en tanto que no trascienden al núcleo de la obligación sustantiva relativa al pago de impuestos, ya que solo exige a los sujetos obligados a entregar la información respectiva.

Es aplicable por el sentido que la orienta, la jurisprudencia 2a./J. 48/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 586, de rubro y texto:

“DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, PREVÉ UNA OBLIGACIÓN DE NATURALEZA FORMAL, QUE NO CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA NI ENTRAÑA EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN. El precepto citado establece que los contribuyentes señalados en el artículo 32-H, fracciones I, II, III y IV, del Código Fiscal de la Federación que celebren operaciones con partes relacionadas, deberán proporcionar a las autoridades fiscales, a más tardar el 31 de diciembre del año inmediato posterior al ejercicio fiscal de que se trate, las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas denominadas maestra, local y país por país, en las que se deberá contener la información que en cada caso se especifica. Ahora bien, **a través de la obligación aludida se provee a las autoridades fiscales de información vinculada con las operaciones realizadas entre partes relacionadas en materia de precios de transferencia, a**

ADELA RAMOS ZARATE
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.56
28/07/24 18:12:02



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Así como la diversa, tesis 2a. CXLVIII/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 798, de rubro y texto siguiente:

“INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES. LA OBLIGACIÓN DE PRESENTARLA NO CONSTITUYE EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN. El artículo 31-A del

DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN. El artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de los contribuyentes de presentar a la autoridad fiscal la información relacionada con las operaciones relevantes que realicen; sin embargo, no puede considerarse que dicha carga representa el ejercicio de facultades de comprobación sino que, en todo caso, se trata de facultades de gestión de la autoridad fiscal para controlar y vigilar el cumplimiento de la obligación de proporcionar información de las operaciones que hayan celebrado. En ese sentido, el hecho de que la norma no prevea las consecuencias por omitir la presentación de la información relativa, no implica que transgreda el derecho a la seguridad jurídica, pues en materia tributaria éste se concreta en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa tributaria, lo que significa que los contribuyentes que no cumplan su obligación saben las consecuencias de su conducta omisiva, ya que la autoridad fiscal podrá no sólo ejercer discrecionalmente sus facultades de gestión, sino incluso las de comprobación, facultades unas y otras que pueden ser objeto de control jurisdiccional."

Finalmente, el quejoso señaló en su **tercer concepto de violación** que la Regla 2.8.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós impone obligaciones diversas a la

- a) El precepto legal obliga a los sujetos obligados a identificar a sus beneficiarios controladores; en tanto que la regla miscelánea obliga a identificar, verificar y validar al beneficiario controlador.
- b) El precepto legal establece a cargo de los sujetos obligados a obtener información de los beneficiarios controladores; en tanto que la regla miscelánea señala que debe conservar la información de la cadena de titularidad y de la cadena de control, así como la documentación que sirva de sustento para ello, y la documentación comprobatoria de los procedimientos internos de control.
- c) El precepto legal establece que la información de los beneficiarios controladores debe ser proporcionada al SAT cuando este la requiera; en tanto que la resolución miscelánea establece que debe permitir el acceso oportuno y otorgar todas las facilidades para que la autoridad acceda a la información, registro, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores.

La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica.

El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de

Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J. 30/2007, de rubro: “**FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.**”¹².

En efecto, debe tenerse en cuenta que la Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 199/2023, indicó que

$$[...]$$

86. Por su parte, en términos generales, las reglas de carácter general prevén los criterios para determinar la existencia del beneficiario controlador tratándose de las personas morales (2.8.1.20.), los procedimientos para la identificación, obtención y conservación de la información de los beneficiarios controladores (2.8.1.21.), la información específica que deberá integrarse en la

¹² Registro digital: 172521. Instancia: Pleno. Novena Época. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 30/2007.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

contabilidad respecto de cada beneficiario controlador (2.8.1.22.), así como la información que están obligados a obtener y conservar los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica.

Así puede advertirse que el artículo 32-B Ter, establece los citados elementos a satisfacer para el cumplimiento de la obligación, en tanto que el solo hecho de agregar conceptos en la regla miscelánea 2.8.1.21, tales como verificar y validar al beneficiario controlador, forman parte de lo expresamente determinado por el artículo 32-B Ter del Código Fiscal de la Federación.

En efecto, son infundadas las manifestaciones hechas por la quejosa, en razón que las conductas que la resolución miscelánea establece, abonan a cumplir con lo establecido por el propio artículo.

Debe tenerse en cuenta que si bien, el precepto legal establece la obligación de obtener y conservar, como parte de su contabilidad diversa documentación, también lo es que ordena que en su oportunidad debe proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información fidedigna, completa y actualizada.

Entonces si es necesario que la documentación recabada sea fidedigna, completa y actualizada, es claro que las acciones que se necesita que quien la obtiene la debe identificar, verificar y validar, entendiendo esta última acción como la manifestación que esa es la documentación que obtuvo del beneficiario controlador.

Así, contrario a lo señalado por la quejosa la regla miscelánea fiscal no crea nuevas obligaciones ni nuevos supuestos a realizar, tampoco de modo alguno excede los alcances que el propio artículo 32-B Ter establece.

Lo anterior ya que se entiende que al solicitar la información por parte del Servicio de Administración Tributaria, la norma no podría indicar que fuera contrario a lo que dispone la miscelánea fiscal, esto es, que no se le diera el acceso a la documentación de forma oportuna, que no le otorgara las



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

facilidades para acceder a la información, registros, datos y documentos en su poder.

Así contrario a lo señalado por la quejosa, no se impone conductas nuevas a realizar, sino atiende al modo en que se debe proporcionar la información, es decir establece características que no son otras que las mínimas esperadas en cada requerimiento.

En esas consideraciones, ante lo **inoperante e infundado** de los conceptos de violación, procede **modificar** la sentencia recurrida, **sobreseer** en el juicio y **negar** el amparo solicitado contra artículos 32 B Ter, 32 B Quater y 32 B Quinquies, del Código Fiscal de la Federación, y las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, y 2.8.1.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés.

Por lo expuesto y fundado, se

RESOLVE:

PRIMERO. Queda **intocado el sobreseimiento** decretado en el considerando TERCERO, de la sentencia que se revisa respecto de la inexistencia de los actos y autoridades que ahí se precisan.

SEGUNDO. Se **MODIFICA** la sentencia recurrida.

TERCERO. Se **SOBRESEE** en el juicio respecto de los artículos 32-D, fracción IX, 42, fracciones XII y XIII, 48-A, 49, primer párrafo, fracciones I y VI, 84-M y 84-N del Código Fiscal de la Federación.

NOTIFÍQUESE; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen; en su oportunidad archívese el expediente, regístrese la sentencia en términos del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados; Presidente Ricardo Olvera García, Abel Méndez Corona y Cynthia Olmedo Martínez Secretaria en Funciones de Magistrada, designada por oficio SEADS/1756/2023, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, en sustitución del Magistrado Francisco García Sandoval, con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés; lo anterior, con fundamento en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de la Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30 y 86, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Fue ponente el segundo de los nombrados.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Firman electrónicamente los Magistrados y la Secretaria en funciones de Magistrada, integrantes de este órgano jurisdiccional con el Secretario de Tribunal que autoriza y da fe.

**MAGISTRADO PRESIDENTE
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
RICARDO OLVERA GARCÍA**

**MAGISTRADO PONENTE
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
ABEL MÉNDEZ CORONA**

SECRETARIA EN FUNCIONES DE MAGISTRADA:
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
CYNTHIA OLMEDO MARTÍNEZ

**SECRETARIA DE TRIBUNAL
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
Adela Ramos Zárate.**

La secretaria Adela Ramos Zárate, certifica que la presente foja corresponde a la sentencia dictada por este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el once de enero de dos mil veinticuatro, en el expediente R.A. 24/2023, dentro del término que establece el artículo 184 de la Ley de Amparo. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.

LIC.ARZ/mhmf

En la misma fecha se crearon los oficios 983 para notificar la sentencia que antecede. Doy Fe

ADELA RAMOS ZARATE
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.50
28/07/24 18:12:02



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
71527456_0061000031832879005.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 4

FIRMANTE					
Nombre:	ADELA RAMOS ZÁRATE		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA					
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.50		Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/01/24 20:01:40 - 15/01/24 14:01:40		Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256				
Cadena de firma:	04 8f 25 9d 64 20 18 e2 07 41 cf aa e7 82 53 55 5d 62 f3 89 b5 46 d0 39 80 d3 6b 21 cb 12 57 e9 97 61 2f 45 7c 80 39 06 bd 8e 3c 87 6b dd 71 8d 20 8f 16 4c 15 49 6c b0 48 de a9 97 52 86 66 08 d6 eb 49 3d cc be 42 e5 c8 9e 25 3c 13 6a 9a 5c 11 57 01 6a 73 6d 06 85 01 47 6f 64 9e e8 f0 ba bc 3d 6d 7c d0 35 02 c4 1c 82 78 49 d5 4a 55 11 56 88 90 e7 64 f9 33 4d 41 86 ae c7 be 6d 21 68 87 4b df 0f 3c bf 6b 6b 3c 57 e5 fe 3c 65 36 d4 d8 c1 bf 3e 2e 00 62 87 3c 8b 90 f3 23 40 c9 4a 1b 53 b0 70 9f ce fc 90 b2 b4 fe 01 c9 9b b6 9b 17 96 a3 48 3a 23 87 28 3f dd 27 ce 60 a2 52 72 b9 02 ef 4b dc aa 4d 19 b0 30 e4 9b f7 e1 47 a5 46 13 02 46 bf 37 32 47 19 5f a8 20 bf 43 db 61 15 c2 6f 4a ee 23 67 77 4a 50 18 87 3b 4a b2 18 24 2e c5 7f 4b 3f e4 4a 64 c0 be 43 80 ad ba bf				
OCSP					
Fecha: (UTC / CDMX)	15/01/24 20:01:40 - 15/01/24 14:01:40				
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03				
TSP					
Fecha : (UTC / CDMX)	15/01/24 20:01:45 - 15/01/24 14:01:45				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	86026069				
Datos estampillados:	bgTu1DRfQkot0tacND8LJlw9Ztw=				



FIRMANTE				
Nombre:	RICARDO OLVERA GARCÍA		Validez:	BIEN
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.9e.6d		Revocación:	Bien
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/01/24 22:10:39 - 15/01/24 16:10:39		Status:	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	a6 e0 5a b7 78 6a fe c2 a6 92 9e 3e 23 10 5b 1e 10 76 d3 0a 4e 17 b1 60 e7 fe 7b 3a d4 25 6c 49 53 49 e3 ce 5a 36 52 a6 ad 78 a5 20 f8 fd 5d 7a b2 80 1b 6c 3f b4 84 3e f5 8d a8 64 41 7c 36 24 29 8a b3 40 8e 9c ff 21 b1 20 a4 3a 6c ba 08 dd 76 32 05 04 6a 87 f6 31 68 6b 5e c9 fd f4 07 d8 1d 49 35 40 d3 92 0b b6 ca df 50 9d 85 81 0d 6e ef 1b 60 6e c6 39 d0 f8 73 ca 88 83 eb 37 26 87 85 2b c4 8d d2 f9 fc 1e db c2 f8 3e 18 a6 04 b6 01 20 2b c4 5e 59 f2 74 18 e1 74 72 b0 64 6e dd 0a 09 1f 9c 9d 0e 11 a4 12 37 a7 21 3e 0c 26 46 98 4b 85 92 d0 69 1b 6d b6 71 27 03 6a 29 6a 00 be ef 3b 6b 19 01 76 98 62 9e 0e a4 f1 3f 1d 23 c7 05 ed 29 d0 ba 77 d9 2d 82 3f 2c a6 fa 34 e8 c5 67 04 f6 b2 97 70 21 b4 dd 42 04 7b 65 15 94 51 e5 10 8c 89 b6 de 8c 1e 3c 4f 20 2a f4 75 3e			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	15/01/24 22:10:40 - 15/01/24 16:10:40			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	15/01/24 22:10:40 - 15/01/24 16:10:40			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	86117251			
Datos estampillados:	QKfONeEDna5ozXkptfd8RbEnuM=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ABEL MÉNDEZ CORONA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.02.d8.8f	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/01/24 22:12:35 - 15/01/24 16:12:35	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	24 91 ca c2 c0 07 3e 88 80 f9 19 13 3f d7 c3 0a f1 84 86 76 af cf c0 c3 a9 10 11 7b 01 50 df 57 b0 8d c6 0b 3e ff 07 8b 0c 35 9a df de f5 a0 96 e7 dd af c6 4f 7b 2b 12 9f e5 22 ed fe 88 f7 b9 c7 a8 a7 41 b0 41 61 41 39 a1 02 5e cc 78 2a b3 a4 26 8c 43 91 c8 00 e4 57 8a 9d 86 41 e4 99 e8 33 87 bf d6 23 a4 cc 9f 6b d2 d1 5d 16 6e 51 29 7b 37 7d 4b 4a 5a 81 3d f0 a0 ce 0a 45 b9 ec fd 4f 03 3f 05 b0 29 90 2a ce da 0e 74 41 97 dd 54 55 1f 2a 39 27 38 b9 0f d1 a4 4c 39 9a 90 7d 43 80 25 a2 45 96 54 4e 5f 2f f3 f4 c8 f1 c8 04 90 4d 00 a2 29 52 83 bb 09 36 e0 3c 1e 1d 85 ba bb e0 d0 44 4e 43 6d 68 6f 98 98 ad 44 b8 73 d5 d0 78 be d5 8b cb c1 de 24 f3 21 7c 37 f9 e2 70 fb 10 e3 12 57 40 1c 89 7c 5d 42 0c 91 94 bd bc e3 33 ac c9 c7 59 f2 cf fe 16 d4 ad 9f 52 80 12			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	15/01/24 22:12:36 - 15/01/24 16:12:36			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	15/01/24 22:12:36 - 15/01/24 16:12:36			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	86118287			
Datos estampillados:	pOAay/j73ST8GObwGHCyAINE5fl=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	CYNTHIA OLMEDO MARTÍNEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.6b	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/01/24 22:14:37 - 15/01/24 16:14:37	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	85 73 5e e3 25 50 f5 1e e9 64 21 f2 cb ae a3 c4 59 dc fd e9 0a 28 1b e3 03 03 0d 51 c3 52 51 79 60 7e 66 0a 08 22 aa 13 92 06 d6 68 51 fb 6d a9 00 64 10 e1 3c 3d 82 6a 62 a8 30 4f ad dc 15 d7 11 a0 5d 78 2b e1 19 d4 97 f3 8c 77 64 6c e4 b1 f7 01 a4 b9 9d 2e bb 8b ee 92 52 48 f2 da a7 06 a6 a9 f9 10 e1 ea aa 32 c2 1a 14 f9 21 f9 af 61 0f 6b 54 6a 08 31 bb d3 f7 fc 07 65 1b 45 31 c4 3f 2f 29 99 89 ef 6d 47 61 f1 5d 30 65 bb df f5 1c aa f1 70 08 a1 fe e4 4f 9f a4 fe a1 d1 f0 eb b5 2f b3 0e 88 0b 9c 74 6a dc 30 b3 33 b1 47 60 eb 39 9b 69 8d 1e 98 a5 08 37 fe 06 27 3f a9 46 3e ee 97 09 9d 43 83 8e 20 ac 0e 9f b2 6e 7f a7 60 77 d3 0b 4c 12 6e b4 b8 a3 c1 1c 07 a1 11 0d 70 3a ec bf 48 d8 9b 1a 59 69 5d e0 98 35 cb 39 df 17 65 4e 98 6e 65 47 e4 0e 0c ac 49 6e 67 dc			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	15/01/24 22:14:37 - 15/01/24 16:14:37			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	15/01/24 22:14:37 - 15/01/24 16:14:37			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	86119065			
Datos estampillados:	S7C3eax2fp1ZeTO5m1+iCViURAI=			

El licenciado(a) Adela Ramos Zárte, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.